



Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

-000054-

06 de Diciembre de 2005

Señor Diputado
Jorge Méndez Herbruger
Presidente de la Junta Directiva
Congreso de la República
Su Despacho

Honorable Señor Presidente:

Con atento saludo me dirijo a usted, con el objeto de remitir el expediente que contiene la **"Iniciativa de Ley No. 3399 "Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica y Estados Unidos de América con su Dictamen correspondiente"**, con el propósito de que se conozca y siga el trámite correspondiente para su discusión y aprobación por el Honorable Pleno del Congreso de la República.

Agradeciendo su atención, me suscribo con las muestras de nuestra consideración y alta estima.


Mariano Rayo Muñoz
Presidente



MRM/mjg
c.c. Secretaría Legislativa
archivo

SECRETARIA
CONGRESO DE LA REPUBLICA

06 DIC. 2005
Hora: 10:05 Firma:



-000055-

*Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

DICTAMEN 05-2005

Dictamen de la Comisión de Economía y Comercio Exterior a la Iniciativa No. 3399 Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio

HONORABLE PLENO:

Con fecha 15 de Noviembre de 2005 el Honorable Pleno conoció y remitió a la Comisión de Economía y Comercio Exterior, para su estudio y dictamen la Iniciativa de Ley identificada con número de registro 3399, por medio de la cual se dispone aprobar la Ley para la Implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América.

ANTECEDENTES:

En septiembre del año 2001 los países solicitaron a Estados Unidos la negociación de un Tratado de Libre Comercio iniciándose una fase exploratoria, tras la cual en agosto del 2002 la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos aprobó la Autoridad de Promoción Comercial que faculta a su Organismo Ejecutivo agilizar las negociaciones comerciales. En enero de 2003 se realizó el lanzamiento oficial de las negociaciones, las cuales se realizaron de enero a diciembre de dicho año, celebrándose nueve rondas.

La etapa de negociación finalizó para Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua el 17 de diciembre de 2003. Costa Rica finalizó su proceso de negociación el 25 de enero de 2004. De enero a mayo de 2004, los países



-000056-

*Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

centroamericanos y Estados Unidos llevaron a cabo el proceso de revisión legal, el cual culminó con la suscripción del Tratado el 28 de mayo de 2004.

Con fecha 16 de marzo de 2005, se publicó en el diario oficial el decreto número 31-2005 del Congreso de la República, el cual aprueba el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana-Centroamérica y los Estados Unidos de América, suscrito en la Ciudad de Washington D.C, el cinco de agosto de 2004. Este decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República, aprobado en un debate final, y entró en vigencia ocho días después de haber aparecido publicado.

Con fecha 28 de julio de 2005, el Congreso de los Estados Unidos de América aprobó la Ley número 3045 "Ley para la Implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centro América y los Estados Unidos" habiendo sido ratificada por el Presidente George W. Bush el día 2 de agosto de 2005.

Hasta la fecha, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y los Estados Unidos de América, han aprobado el Tratado de Libre Comercio, quedando sólo pendiente Costa Rica, con lo que, conforme a lo acordado, el TLC esta previsto que entre en vigencia el próximo 1 de enero de 2006 entre aquellos países que hayan certificado el cumplimiento de los compromisos previos suscritos en los textos del mismo tratado.

El TLC-RD-CAUSA, esta compuesto de 22 capítulos, los cuales son los siguientes:

1. Disposiciones iniciales



-000057-

*Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

2. Definiciones generales
3. Trato nacional y acceso de bienes al mercado
4. Régimen de origen y procedimientos de origen
5. Administración aduanera y facilitación del comercio
6. Medidas sanitarias y fitosanitarias
7. Obstáculos técnicos al comercio
8. Defensa comercial
9. Contratación pública
10. Inversiones
11. Comercio transfronterizo de servicios
12. Servicios financieros
13. Telecomunicaciones
14. Comercio electrónico
15. Derechos de propiedad intelectual
16. Laboral
17. Ambiental
18. Transparencia
19. Administración del Tratado
20. Solución de controversias
21. Excepciones
22. Disposiciones finales

El primero señala los objetivos, la relación con otros Tratados internacionales y el alcance de las obligaciones. El segundo contiene las definiciones generales sobre los términos mas empleados en el tratado. El resto de capítulos se refieren a los aspectos específicos del Tratado.

El principal objetivo del Tratado es eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias, estableciendo normas sobre el comercio de bienes y servicios.



-000058-

*Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

sobre contratación pública inversión, sobre solución de controversia, propiedad intelectual y sobre otros aspectos relacionados al comercio.

Sin embargo, los objetivos específicos desarrollados de manera más detallada a través de sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, son:

- a) Estimular la expansión y diversificación del comercio entre las Partes;
- b) Eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y servicios entre los territorios de las Partes;
- c) Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio;
- d) Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes;
- e) Proteger en forma adecuada y eficaz y hacer valer los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada Parte;
- f) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y el cumplimiento de este Tratado, para su administración conjunta, y para la solución de controversias;
- g) Establecer lineamientos para la cooperación bilateral, regional, y multilateral dirigida a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado.

Con lo anterior, los partes firmantes deben cumplir con la formulación y aprobación de reformas legales y administrativas en sus respectivos países, tal como lo aceptaron al momento de firmar, aprobar y ratificar el TLC.

DE LA INICIATIVA:

La Iniciativa de Ley 3399 tiene por objeto dar cumplimiento al espíritu y la letra de los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala en la negociación.



-000059-

*Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

suscripción y aprobación del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América, así como facilitar el intercambio comercial equitativo, fomentar la atracción de inversiones productivas permanentes, impulsar la generación de empleos y fuentes de trabajo, proteger los derechos de los nacionales y promover a los sectores pequeños y medianos de productores guatemaltecos.

La Iniciativa de ley se divide en capítulos tratando de ser equivalente a los capítulos del CAFTA. De esta manera se establece un orden, así como mejor comprensión de los temas en los que se cumplen los compromisos de Estado adquiridos al momento de suscribir, aprobar y ratificar el TLC con los Estados Unidos de América.

Asimismo, la iniciativa no sólo contempla el concepto de *autoejecutabilidad* del tratado internacional, entendiéndose este como que al momento de su aprobación por parte del Congreso de la República, su contenido se incorpora al ordenamiento jurídico nacional guatemalteco, sino para otorgar certeza jurídica a los administradores de justicia, así como para los usuarios de las leyes nacionales, se reforman, por adición, supresión o modificación, explícitamente las leyes correspondientes. Además, se tiene como referencia la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Adicionalmente, la iniciativa de ley se ajusta a los tiempos establecidos de cumplimiento en el tratado, pero además, y en los casos en que el beneficio de las reformas se consideró trascendente, se incorporan modificaciones previstas para los próximos 48 meses a partir de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, esto es particularmente notorio en los capítulos de contrataciones públicas, transparencia, servicios financieros, comercio de servicios transfronterizo, y en algunos casos, propiedad intelectual.



-000060-

*Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

La iniciativa de ley 3399 contiene los capítulos siguientes:

- a) Contrataciones Públicas
- b) Comercio Transfronterizo de Servicios
- c) Servicios Financieros
- d) Telecomunicaciones
- e) Propiedad Intelectual
- f) Ambiental
- g) Solución de Controversias
- h) Disposiciones Transitorias y Finales

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA DE LEY:

El análisis de la iniciativa de ley 3399 se realizó desagregando el texto del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana- Centroamérica y los Estados Unidos de América en una matriz global de trabajo. Esta matriz se dividió en texto del tratado, compromiso identificado, momento de cumplimiento, ley nacional afectada y responsable de propuesta. La iniciativa de ley sólo incorpora los compromisos que requieren reforma legislativa, porque la matriz identificó reformas ejecutivas y administrativas, las cuales están siendo atendidas por el Organismo Ejecutivo, a partir de la coordinación del Ministerio de Economía.

De lo anterior, y correspondiente al texto del TLC, se analizaron los siguientes compromisos para ser cumplidos o verificados como sujetos de cumplimiento, identificándose los mismos con el número de capítulo, artículo, literal y párrafo.

1. Artículo 9.1.5



-000061-

*Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

2. Artículo 9.7 (3)
3. Artículo 9.5 (1,2)
4. Artículo 9.10 (2,3)
5. Artículo 9.7.3
6. Artículo 9.9.3
7. Artículo 9.15.3
8. Artículo 9.15 (1)
9. Artículo 13.7
10. Artículo 13.4 (6)
11. Artículo 13.3 (2)
12. Artículo 13.4 (4)
13. Artículo 13.4 (5)
14. Artículo 13.3 (3)
15. Artículo 13.11
16. Artículo 13.12
17. Artículo 13.7
18. Artículo 15.2 (1)
19. Artículo 15.3 (7)
20. Artículo 15.2 (1)
21. Artículo 15.2 (10)
22. Artículo 15.3 (7)
23. Artículo 15.9 (11)
24. Artículo 15.1 (3) (a)
25. Artículo 15.9 (9, 10)
26. Artículo 15.9 (10,11)
27. Artículo 15.09 (6) (a y b)
28. Artículo 15.12 (2) (d ii)
29. Artículo 15.9 (4)
30. Artículo 15.11 (8)



-000062-

*Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

31. Artículo 15.11 (11) (b)
32. Artículo 15.11 (19)
33. Artículo 15.11 (23)
34. Artículo 15.11 (20)
35. Artículo 15.11 (22)
36. Artículo 15.11 (20)
37. Artículo 15.5 (1)
38. Artículo 15.7 (5) (a ii)
39. Artículo 15.5 (2)
40. Artículo 15.11 (26) (b iv)
41. Artículo 15.11 (14) (a)
42. Artículo 15.11 (23)
43. Artículo 15.11 (26) (b vi)
44. Artículo 15.11 (18)
45. Artículo 15.5 (7)
46. Artículo 15.5 (7) (d, e (i), f)
47. Artículo 15.5 (8) (a,b,c)
48. Artículo 15.11 (11,15)
49. Artículo 15.11 (14)
50. Artículo 15.11 (12)
51. Artículo 15.5 (9)
52. Artículo 17.3 (1) (c ii)

Es importante destacar que un artículo específico de CAFTA puede significar reformas en varios artículos de una ley nacional o varias leyes nacionales, con lo cual la Comisión de Economía y Comercio Exterior, se preocupó por mantener la integralidad del cumplimiento.



-000063-

*Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

Por último se realizó un análisis de consistencia de la iniciativa de ley con los plazos de entrada en vigencia de las reformas propuestas, dando como resultado la redacción de varios artículos transitorios, los cuales establecen las fechas de entrada en vigencia de algunos compromisos, en particular los que se relacionan a propiedad intelectual.

CONSIDERACIONES LEGALES:

Del análisis legal realizado por el cuerpo de asesores de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, se llegó a la conclusión que la Iniciativa de Ley 3399 no contraviene ninguna norma constitucional y legal vigente, por lo que es procedente la aprobación de la misma por parte del Pleno del Congreso de la República.

OPINIONES RECABADAS:

Siendo el Ministerio de Economía, por delegación del mismo Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana- Centroamérica y los Estados Unidos de América, el administrador y responsable primario de la implementación del CAFTA, este fue el interlocutor principal para articular las opiniones de las instituciones del sector público. El Ministerio de Economía conformó grupos de análisis y estudios, los cuales emitieron opinión calificada sobre la iniciativa de ley. Dentro de las instituciones estatales que participaron en los grupos de trabajo se encuentran: Ministerio de Economía, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Finanzas Públicas, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Banco de Guatemala, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Administración Tributaria, Superintendencia de



-000064-

*Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

Telecomunicaciones, Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas y Contraloría General de Cuentas.

Adicionalmente, la Comisión de Economía y Comercio Exterior, convocó a opinar sobre la iniciativa de ley a las instituciones y organizaciones siguientes: Cámara de Industria, Asociación Bancaria de Guatemala, Cámara de Finanzas de Guatemala, Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales, Cámara del Agro, Cámara de la Construcción de Guatemala, Centro de Investigaciones Económicas Nacionales y Asociación de Industriales Farmacéuticos de Guatemala.

Por motivo de las opiniones recabadas, la iniciativa de ley 3399 fue modificada suprimiendo artículos propuestos y adicionando otros con el fin de atender adecuadamente el objetivo general de la iniciativa contemplado en el artículo 1 de la propuesta. Cambios se realizaron particularmente en el capítulo de contrataciones públicas, propiedad intelectual y medio ambiente.

CONCLUSIÓN:

Por lo anteriormente considerado se concluye que la Iniciativa de Ley número 3399 "Ley para la Implementación del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana- Centroamérica y los Estados Unidos de América" constituye un instrumento que consolida y mejora las condiciones de defensa de los derechos de los guatemaltecos y guatemaltecas en materia comercial y jurídica, así como da cumplimiento al espíritu y la letra de los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala en la negociación, suscripción y aprobación del RD-CAFTA, facilitando el intercambio comercial equitativo, fomentando la atracción de inversiones productivas permanentes, impulsando la generación de empleos y fuentes de trabajo, protegiendo los derechos de los



-000065-

*Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

nacionales y promoviendo a los sectores pequeños y medianos de productores guatemaltecos.

Consecuentemente, la Comisión de Economía y Comercio Exterior emite **DICTAMEN FAVORABLE** a la Iniciativa de Ley No. 3399 para que sea el Honorable Pleno del Congreso de la República, quien conozca y decida conforme al artículo 171 literal I) de la Constitución Política de la República sobre la aprobación de la Ley para la Implementación del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana-Centroamérica y los Estados Unidos de América.

Dado en la Sala de la Comisión de Economía y Comercio Exterior en la Ciudad de Guatemala a los treinta días del mes de Noviembre del año dos mil cinco.

Mariano Rayo Muñoz
PRESIDENTE

Carlos Santiago Nájera Sagastume
VICEPRESIDENTE

Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre

Luis Alberto Velásquez Cerdas

Víctor Leonel Ramírez Hernández

Julio Lowenthal Foncea

César Emilio Fajardo Morales



-000066-

*Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

Mynor Estuardo López Rodríguez

Manuel Antonio Baldizón Méndez

Mauricio René León Corado

Marco Vinicio Cerezo Arévalo

Pablo Monsanto

Héctor Julio Pérez Rojas

Jorge Estuardo Girón Chacón

Carlos Humberto Morales Morales



EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

DECRETO NUMERO _____-2005

Considerando:

Que el Decreto número 31-2005 del Congreso de la República aprobó el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América, suscrito en la ciudad de Washington, DC, por medio del cual se establecerá una zona de libre comercio de conformidad con lo dispuesto en el Artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y el Artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, con el fin de estimular la expansión y la diversificación del comercio de bienes y servicios entre las Partes.

Considerando:

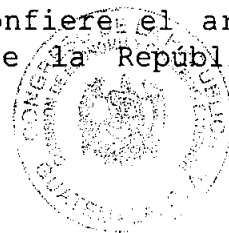
Que con la aprobación del citado Tratado de Libre Comercio, el Estado de Guatemala adquirió compromisos para realizar reformas a su sistema jurídico, especialmente en aquellos sectores que forman parte de la normativa del instrumento, a través del cual se establecen reglas claras, transparentes, y que proporcionan certeza jurídica a la relación comercial que se proporciona en dicho marco.

Considerando:

Que para dar cumplimiento a la agenda comercial que se deriva del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América; el Estado de Guatemala debe reformar algunas leyes internas para ser consistentes con la normativa del citado Tratado, especialmente al intercambio comercial, a la atracción de inversiones, a la facilitación de la generación de empleo, a la protección de derechos y la promoción de los sectores pequeños y medianos de productores nacionales.

Por tanto

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171, literal a) de la Constitución Política de la República de Guatemala,



Decreta

La siguiente:

Ley para la Implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América

CAPITULO I

Consideraciones Generales

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto dar cumplimiento al espíritu y la letra de los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala en la negociación, suscripción y aprobación del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América, así como facilitar el intercambio comercial equitativo, fomentar la atracción de inversiones productivas permanentes, impulsar la generación de empleos y fuentes de trabajo, proteger los derechos de los nacionales y promover a los sectores pequeños y medianos de productores guatemaltecos.

CAPITULO II

CONTRATACIONES PUBLICAS

Artículo 2. Se reforma el artículo 17 bis, de la Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto 119-96 del Congreso de la República, el cual queda así:

"Artículo 17 Bis. Excepciones. Se exceptúa en materia laboral, tributaria y de contrataciones públicas, la aplicación de los procedimientos regulados en la presente ley, para la substanciación de los Recursos de Reposición y Revocatoria, debiéndose aplicar los procedimientos establecidos por el Código de Trabajo, por el Código Tributario y por la Ley de Contrataciones del Estado, respectivamente."

Artículo 3. Se reforma el artículo 1 del Decreto 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 1. Objeto. La compra y venta y la contratación de bienes, suministros, obras y servicios que requieran los organismos del Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas estatales o municipales, se sujetan a la presente ley y su reglamento. Las donaciones que a favor del Estado, sus dependencias, instituciones o municipalidades hagan personas, entidades, asociaciones u otros Estados o Gobiernos extranjeros, se regirán únicamente por lo convenido entre las partes, pero si tales entidades o dependencias tienen que hacer alguna aportación, a excepción de las municipalidades, previamente oirán al Ministerio de Finanzas Públicas.

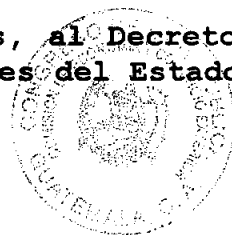
En lo relativo a lo dispuesto en convenios y tratados internacionales de los cuales la República de Guatemala sea parte, las disposiciones contenidas en la presente ley y reglamentos de la materia se aplicarán en forma complementaria, siempre y cuando no contradigan los mismos."

Artículo 4. Se adiciona el artículo 5 bis, al Decreto 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 5 bis. Bienes y suministros de producción nacional. Los organismos del Estado y las entidades a que se refiere el Artículo 1 de esta ley, deberán dar preferencia a los bienes y suministros de producción u origen nacional, cuando:

- a) El valor en cada caso no exceda del monto establecido para adquisiciones por el régimen de cotización;
- b) Se produzca en cantidad suficiente para la necesidad respectiva;
- c) Cumpla con las especificaciones, generales, técnicas y especiales incluyendo los requisitos de calidad establecidos en las bases de licitación o formularios para cotización; y,
- d) Que el precio sea igual o más bajo al que tengan los mismos bienes importados en el mercado nacional."

Artículo 5. Se adiciona un nuevo artículo 19 bis, al Decreto 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, el cual queda así:



"Artículo 19 bis. En caso de que una entidad contratante, en el curso de una licitación, modifique los requisitos o criterios de las bases de licitación referidos en el artículo 19 anterior, transmitirá, por escrito y por los medios más expeditos posibles, las modificaciones al momento de realizadas a todos los oferentes, concursantes y proveedores que estén participando en la licitación.

Los oferentes, concursantes y proveedores que estén participando en la licitación y que reciban las modificaciones, contarán con un tiempo razonable, no menor de 8 días, para modificar y volver a presentar sus ofertas, según corresponda."

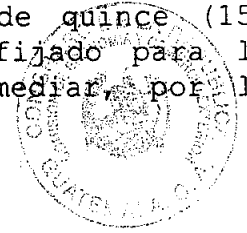
Artículo 6. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 20 del Decreto 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 20. Especificaciones Generales, Técnicas, Disposiciones Especiales y Planos de Construcción. La autoridad superior velará porque las especificaciones generales, técnicas, disposiciones especiales o planos de construcción, sean congruentes o se ajusten al contenido de las bases y con las necesidades que motiven la contratación. En el reglamento de esta ley se determinará todo lo relativo a esta materia.

La entidad licitante o contratante no deberá fijar especificaciones técnicas o disposiciones especiales que requieran o hagan referencia a determinadas marcas o nombres comerciales, patentes, diseños o tipos, ni orígenes específicos o productores o proveedores, salvo que no exista otra manera suficientemente precisa y comprensible para describir los requisitos de la licitación o contratación y siempre que, en tales casos, se incluyan en las especificaciones, requisitos y documentos de licitación o contratación expresiones como: o equivalente, o semejante, o similar, o análogo."

Artículo 7. Se reforma y se adiciona un párrafo segundo al artículo 23 del Decreto 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 23. Publicaciones. Las convocatorias a licitar se publicarán, por lo menos, dos veces en el diario oficial y dos veces en otro de mayor circulación, así como en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala -GUATECOMPRAS-, dentro de un plazo de quince (15) días. Entre la última publicación y el día fijado para la presentación y recepción de ofertas, deberá mediar, por lo menos un término no menor de cuarenta (40) días.



Queda a salvo lo dispuesto en convenios y tratados internacionales de los cuales Guatemala sea parte."

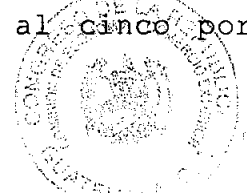
Artículo 8. Se reforma el artículo 28 del Decreto 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 28. Criterios de Calificación de Ofertas. Para determinar cual es la oferta más conveniente y favorable para los intereses del Estado, se utilizaran los criterios siguientes: calidad, precio, valor del contenido de producción u origen nacional, tiempo, características y demás condiciones que se fijan en las bases en los cuales también se determinará el porcentaje en que se estimara cada uno de los referidos elementos, salvo que en estas se solicite únicamente el precio, en cuyo caso, la decisión se tomará con base en el precio más bajo. Cuando se trate de obras, la junta tomará en cuenta el costo total oficial estimado."

Artículo 9. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 37 del Decreto 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 37. Derecho de Prescindir. Los organismos del Estado y las entidades a que se refiere el artículo 1 de esta ley, pueden por intermedio de las autoridades que determina el artículo 9 de la misma, prescindir de la negociación en cualquier fase en que ésta se encuentre, pero antes de la suscripción del contrato respectivo.

Bajo la responsabilidad de la autoridad que corresponda, la decisión de prescindir sólo puede adoptarse si ocurriere un caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobado, que diere lugar a la imposibilidad de continuar con la negociación. Si la decisión de prescindir se adopta con posterioridad a la presentación de ofertas y antes de la adjudicación, la junta deberá hacer una calificación para el solo efecto de compensar al oferente que ocupen los tres primeros lugares, de los gastos incurridos en la elaboración de su oferta, por el equivalente al dos y medio por millar (2.5 0/000) del monto de la misma. Pero si la decisión de prescindir se adopta después de la adjudicación, pero antes de la suscripción del contrato respectivo, se deberá compensar al oferente ganador que ocupó el primer lugar, de los gastos incurridos en la elaboración de su oferta y otros trámites, por el equivalente al cinco por millar (5 0/000) del monto de la misma.



Queda a salvo lo dispuesto en convenios y tratados internacionales de los cuales Guatemala sea parte."

Artículo 10. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 39 del Decreto 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 39. Formulario de Cotización. Mediante formulario de cotización, deberá obtenerse un mínimo de tres ofertas firmes solicitadas a proveedores que se dediquen en forma permanente a ese giro comercial y esté legalmente establecido para el efecto y que estén en condiciones de vender o contratar los bienes, suministros, obras o servicios requeridos. Los formularios de cotización, las bases, especificaciones generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales y planos, según procedan, deberán entregarse sin costo alguno a los interesados en presentar ofertas.

La entidad o persona contratante no deberá fijar especificaciones técnicas o disposiciones especiales que requieran o hagan referencia a determinadas marcas o nombres comerciales, patentes, diseños o tipos, ni orígenes específicos o productores o proveedores, salvo que no exista otra manera suficientemente precisa y comprensible para describir los requisitos de la contratación y siempre que, en tales casos, se incluyan en las especificaciones, requisitos, documentos y formularios de cotización expresiones como: *o equivalente, o semejante, o similar o análogo.*"

Artículo 11. Se adiciona un nuevo artículo 39 bis, al Decreto 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 39 bis. En caso de que una entidad contratante, en el curso de un proceso de cotización, modifique las condiciones de la cotización, transmitirá, por escrito y por los medios más expeditos posibles, las modificaciones al momento de realizadas a todos los oferentes, concursantes y proveedores que estén participando en la cotización.

Los oferentes, concursantes y proveedores que estén participando en la cotización y que reciban las modificaciones, contarán con un tiempo razonable, no menor de 8 días, para modificar y volver a presentar sus ofertas, según corresponda."

Artículo 12. Se reforma el Capítulo X, Capítulo Único, Recursos, del Decreto 57-92, del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, el cual queda así:



"TITULO X

CAPITULO UNICO

RECURSO DE REVISION

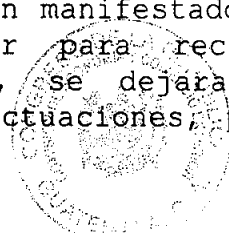
Artículo 99. Procedencia del Recurso de Revisión. En contra de las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas de los organismos y las entidades establecidas en el artículo 1 de esta ley, únicamente procederá el recurso de revisión, el que podrá interponerse dentro del plazo de diez (10) días contados a partir del día siguiente de la notificación, ante la autoridad que emitió la resolución la que en tres días remitirá el recurso y las actuaciones al Subcontralor de Impugnaciones de Contrataciones Públicas de la Contraloría General de Cuentas.

Artículo 100. Requisitos de la solicitud. El memorial de interposición cumplirá con los requisitos siguientes:

1. Autoridad a quien se dirige;
2. Nombre del recurrente y lugar en donde recibirá notificaciones;
3. Identificación precisa de la resolución que impugna y fecha de la notificación de la misma;
4. Exposición de los motivos por los cuales se recurre;
5. Sentido de la resolución que según el recurrente deba emitirse en sustitución de la impugnada;
6. Lugar, fecha y firma del recurrente o su representante, si no sabe o no puede firmar imprimirá la huella digital de su dedo pulgar derecho u otro que especificará.

Artículo 101. Trámite del Recurso de Revisión. Recibido el recurso y las actuaciones, el Subcontralor de Impugnaciones de Contrataciones Públicas de la Contraloría General de Cuentas, verificará que el recurso cumpla con los requisitos establecidos en el artículo anterior, dando audiencia a la autoridad recurrida por el plazo de 5 días.

Con la contestación de la autoridad recurrida se dará audiencia por el plazo común de 5 días a la Procuraduría General de la Nación, al interponente y proveedores que hayan manifestado su interés en el expediente y señalado lugar para recibir notificaciones. Asimismo durante este plazo, se dejarán a disposición de los interesados copia de las actuaciones, para que puedan ser examinadas.



Vencido el plazo anterior, se hayan o no pronunciado los antes mencionadas, el Subcontralor de Impugnaciones de Contrataciones Públicas, resolverá dentro del plazo de diez días (10) pudiendo modificar o confirmar o revocar la resolución impugnada.

La resolución del Recurso de Revisión, deberá ser razonada y fundamentada en derecho, causando estado y agotara la vía administrativa."

Artículo 13. Se reforma el artículo 102 del Decreto 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 102. Jurisdicción de lo contencioso Administrativo. Toda controversia relativa al incumplimiento, interpretación, aplicación y efectos de los actos o resoluciones de las entidades a que se refiere el artículo 1 de la presente ley, así como en los casos de controversias derivadas de contratos administrativos, después de agotada la vía administrativa y conciliatoria, se someterán a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Queda a salvo lo dispuesto en el artículo siguiente."

Artículo 14. Se reforma el artículo 103 del Decreto 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 103. Arbitraje. Si así lo acuerdan las partes, las controversias relativas al cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos de los contratos celebrados con motivo de la aplicación de la presente ley, se podrán someter a la jurisdicción arbitral mediante cláusula compromisoria o convenio arbitral.

Toda controversia relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos de los contratos celebrados con motivo de la aplicación de la presente ley, se someterá a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo o a la jurisdicción arbitral mediante cláusula compromisoria o convenio arbitral. No se podrá iniciar acción penal, sin la previa conclusión de la vía administrativa, o del arbitraje."

Artículo 15. Se adiciona un nuevo artículo 103 bis, al Decreto 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, el cual queda así:



"Artículo 103 bis. Jurisdicción Ordinaria. Se consideran de índole civil y de la competencia de la jurisdicción ordinaria, las cuestiones en que el derecho vulnerado sea de carácter civil y también aquellas que emanen de actos en que el Estado haya actuado como sujeto de derecho privado."

Artículo 16. Se reforma el párrafo cuatro del artículo 2 del Decreto 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, el cual queda así:

"La Contraloría General de Cuentas deberá velar también por la probidad, transparencia y honestidad en la administración pública y sus contrataciones, así como también por la calidad del gasto público."

Artículo 17. Se reforma el artículo 11 del Decreto 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, el cual queda así:

"Artículo 11. Organización. La dirección, administración y funcionamiento de la Contraloría General de Cuentas, está estructurada en el siguiente orden jerárquico:

- a) Contralor General de Cuentas;
- b) Subcontralor de Probidad;
- c) Subcontralor de Calidad de Gasto Público;
- d) Subcontralor de Impugnaciones de Contrataciones Públicas; y,
- e) Directores.

Las direcciones comprenderán, entre otras; de Auditoria Gubernamental, de Asesoría Técnica, de Asuntos Jurídicos, de Administración, de Finanzas, de Auditoria Interna, de Recursos Humanos, de Infraestructura Pública, de Probidad, de Calidad de Gasto Público y de Contrataciones Públicas. Adicionalmente de las unidades que se deriven de dichas direcciones, se contará con Unidades de Relaciones Públicas, Planificación, Informática, y el Centro de Profesionalización Gubernamental.

El reglamento de esta Ley desarrollará la estructura funcional administrativa, así como los requisitos necesarios para optar a los cargos definidos dentro de dicha estructura. En el caso de los Directores a que se refiere el presente artículo, estos deberán ser profesionales colegiados activos."

Artículo 18. Se adiciona el artículo 21 bis al Decreto 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, el cual queda así:



"Artículo 21 bis. Subcontralor de Impugnaciones de Contrataciones Públicas. El Subcontralor de Impugnaciones de Contrataciones Públicas será nombrado por el Contralor General de Cuentas. El Subcontralor de Impugnaciones de Contrataciones Públicas debe ser abogado y notario, colegiado activo con no menos de diez (10) años de ejercicio profesional y experiencia en derecho público.

El Subcontralor de Impugnaciones de Contrataciones Públicas gozará de los mismos privilegios e inmunidades que el Contralor General de Cuentas."

Artículo 19. Se adiciona el artículo 21 ter al Decreto 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, el cual queda así:

"Artículo 21 ter. Función principal del Subcontralor de Impugnaciones de Contrataciones Públicas. El Subcontralor de Impugnaciones de Contrataciones Públicas tiene la función principal de resolver los recursos de Revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las entidades contratantes, en materia de contratación pública."

Artículo 20. Se adiciona el artículo 21 quater al Decreto 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, el cual queda así:

"Artículo 21 quater. Funciones y Competencias Específicas del Subcontralor de Impugnaciones de Contrataciones Públicas. El Subcontralor de Impugnaciones de Contrataciones Públicas tiene las funciones y competencia siguientes:

- a) Recibir, tramitar y conocer los recursos de revisión en materia de Contrataciones Públicas;
- b) Rechazar las impugnaciones que no cumplan con los requisitos establecidos.
- c) Velar por el estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado, Tratados internacionales y en leyes aplicables.
- e) Resolver los recursos de revisión que se interpongan en materia de Contrataciones Públicas, pudiendo confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada.

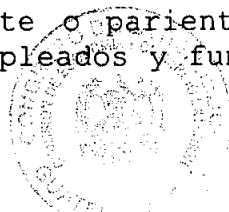


- g) Las demás funciones y competencias que se determinen en otras leyes."

Artículo 21. Se reforma el primer párrafo del artículo 22 del Decreto 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, el cual queda así:

"Artículo 22. Prohibiciones. Además de las prohibiciones contenidas en la Constitución Política de la República y otras leyes, al Contralor General de Cuentas, al Subcontralor de Probidad, al Subcontralor de Calidad de Gasto Público, al Subcontralor de Impugnaciones de Contrataciones Publicas, a los Directores, Jefes y Auditores Gubernamentales y demás personal de la institución, le son aplicables las prohibiciones siguientes:

- a) Desempeñar otros cargos en la administración pública;
- b) Obligar al personal de la institución a participar en actividades políticas, sindicales o religiosas;
- c) Pertenecer a cuadros directivos de organizaciones políticas;
- d) Formar parte de cuerpos colegiados de organismos y entidades del sector público o de cualquier ente sujeto a control externo posterior, o asesorarlos a título personal;
- e) Dedicarse directa o indirectamente a actividades especulativas con cualquier organismo o entidad sujeta a fiscalización;
- f) Ser contratista de empresas que reciban fondos del Estado, de sus entidades descentralizadas, autónomas o del municipio, sus fiadores y con quienes se tengan reclamaciones pendientes por dichos negocios;
- g) Defender intereses de personas individuales o jurídicas que presten servicios públicos;
- h) Ser accionista, director o representante legal de las empresas, organizaciones o instituciones sujetas a fiscalización; e,
- i) Nombrar al cónyuge o conviviente o parientes dentro de los grados de ley, como a empleados y funcionarios



de la Contraloría para desempeñar cargos en la institución."

Artículo 22. Se reforma el artículo 23 del Decreto 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, el cual queda así:

"**Artículo 23. Responsabilidad.** El Contralor General de Cuentas, el Subcontralor de Probidad, el Subcontralor de Calidad de Gasto Público y el Subcontralor de Impugnaciones de Contrataciones Públicas serán responsables conforme al ordenamiento jurídico vigente, cuando por dolo, culpa o negligencia, causaren perjuicio a los intereses del Estado, municipios, entidades e instituciones descentralizadas y autónomas, en el ejercicio de sus funciones."

Artículo 23. Se reforma el artículo 31 del Decreto 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, el cual queda así:

"**Artículo 31. Obligación de Caucionar Responsabilidad.** El Contralor General de cuentas, el Subcontralor de Probidad, El Subcontralor de calidad de Gasto Público, El Subcontralor de Impugnaciones de Contrataciones Públicas, los Directores, Jefes y Auditores Gubernamentales deben caucionar su responsabilidad por medio de fianza y presentar declaración de bienes y deudas de conformidad con lo que establece la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos."

Artículo 24. Se reforma el artículo 32 del Decreto 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, el cual queda así:

"**Artículo 32. Presupuesto.** Corresponde a la Contraloría General de Cuentas una asignación anual no menor del cero punto setenta y cinco por ciento (0.75%) de los ingresos ordinarios del Estado, determinados en el Presupuesto General de Ingresos del Estado, para cubrir los gastos de funcionamiento y fiscalización que le corresponde por mandato constitucional,"

Artículo 25. Se reforma el artículo 35 del Decreto 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, el cual queda así:

"**Artículo 35. Ejecución y fiscalización presupuestaria.** La Contraloría General de Cuentas queda facultada para administrar, ejecutar, registrar y controlar los fondos contemplados en su presupuesto."

La fiscalización del presupuesto de la Contraloría General de Cuentas será ejercida por el Congreso de la República, determinando si la gestión institucional de la Contraloría General de Cuentas se realiza bajo criterios de probidad, eficacia, eficiencia, transparencia, economía y equidad."

Artículo 26. Se reforma el artículo 44 del Decreto 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, el cual queda así:

"Artículo 44. Recursos Legales. Contra las resoluciones que dicte el Contralor General de Cuentas, procede el recurso de reposición y contra las resoluciones que dicten los Subcontralores de Probidad y de Calidad de Gasto Publico, Directores y Jefes de dependencias de la Contraloría General de Cuentas, procede el recurso de revocatoria. En los casos anteriores, deberá observarse el procedimiento que para el efecto establece la Ley de lo Contencioso Administrativo.

En contra de las resoluciones que dicte el Subcontralor de Impugnaciones de Contrataciones Públicas, no cabe ningún recurso administrativo."

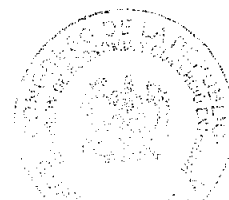
CAPITULO III

COMERCIO TRANSFRONTERIZO DE SERVICIOS

Artículo 27. Se adiciona el artículo 286 bis al Código de Comercio, Decreto 2-70 del Congreso de la República, el cual queda así:

"Artículo 286 bis.- Las personas individuales o jurídicas que actúen como distribuidores, agentes o representantes, al amparo de esta ley, deberán inscribirse como tales en el Registro de Agentes, Distribuidores y Representantes, que para este fin establecerá y administrará el Registro Mercantil."

Artículo 28. Se reforma el artículo 291 del Código de Comercio, Decreto Ley 2-70 del Congreso de la República, el cual queda de la siguiente manera:



"ARTÍCULO 291. Controversias. Cuando las partes no se pusieren de acuerdo, después de ocurrida la terminación o rescisión del contrato o relación respectiva sobre la cuantía de la indemnización que deba pagarse por los daños y perjuicios causados en los casos previstos en los numerales 4 y 5 del artículo anterior, el monto de la misma deberá determinarse en proceso arbitral o en proceso judicial en la vía sumaria, para el efecto se entenderá, salvo pacto en contrario, que las partes han optado por el arbitraje si no establecen de manera expresa que la controversia debe dirimirse en la vía sumaria judicial. En caso de que la controversia se resuelva en proceso judicial en la vía sumaria, el demandante deberá proponer dictamen de expertos, de conformidad con lo establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil, a efecto de que se dictamine dentro del proceso, sobre la existencia y la cuantía de los daños y perjuicios reclamados.

En el contrato respectivo las partes también pueden optar por el arbitraje o por la vía judicial en proceso sumario, para resolver cualquier clase de controversia derivadas de dicho contrato; para el efecto se entenderá, salvo pacto en contrario, que las partes han optado por el arbitraje si no establecen de manera expresa que la controversia debe dirimirse en la vía sumaria judicial.

En todo caso, tanto los procesos judiciales como arbitrales, deben tener lugar, tramitarse y resolverse en la República de Guatemala de acuerdo a las leyes nacionales aplicables a los procedimientos judiciales o arbitrales.

Si una de las partes fuere condenada al pago de indemnización, la sentencia o el laudo podrá contemplar pronunciamiento:

- a) Sobre existencia o inexistencia de perjuicios y en caso de declararse su existencia la cuantía de los mismos que en equidad corresponden, según la naturaleza y circunstancias del negocio; y
- b) Sobre la existencia o inexistencia de daños y en caso de declararse su existencia, la cuantía de los mismos, en los siguientes rubros:
 - 1) Por concepto de gastos directos y de promoción o propaganda, que se hubiere efectuado con motivo y para los fines del contrato, durante el último año.
 - 2) Por concepto de inversiones que con ocasión o motivo del contrato, se hayan efectuado, siempre que éstas

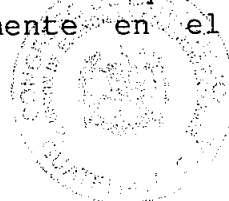
no fueren recuperables o aprovechables para otros fines.

- 3) Por concepto de pago de las mercancías existentes al precio de costo bodega (C.I.F.) que ya no pudieren venderse por causa de la terminación o rescisión del contrato, siempre que estuviere en buen estado. Sin embargo, también se considerará que se encuentra en buen estado aquella mercancía cuya descomposición sea imputable al principal.
- 4) Por concepto de indemnización a „que conforme a la ley, tuvieren derecho los empleados o trabajadores cuyo despido obedeciere a la terminación del contrato.”

Artículo 29. Se reforma el artículo 338 del Decreto 2-70 del Congreso de la República, Código de Comercio, el cual queda así:

“Artículo 338. Otras inscripciones. Aparte de los hechos y relaciones jurídicas que especifiquen las leyes, es obligatorio el registro de los siguientes:

1. El nombramiento de administradores de la sociedad, de factores y el otorgamiento de mandatos por cualquier comerciante, para operaciones de su empresa.
2. La revocación o limitación de las designaciones y mandatos a que se refiere el inciso anterior.
3. La creación, adquisición, enajenación, o gravamen de empresa o establecimientos mercantiles.
4. Las capitulaciones matrimoniales de los comerciantes individuales y sus modificaciones, así como el inventario de los bienes que pertenezcan a las personas sometidas a su patria potestad o tutela.
5. Las modificaciones de la escritura constitutiva de las sociedades mercantiles, la prórroga de su plazo y la disolución o liquidación.
6. La constitución, modificación y extinción de derechos reales sobre la empresa o sus establecimientos.
7. Cualquier cambio que ocurra en los datos de la inscripción inicial y cualquier hecho que los afecte.
8. Las emisiones de acciones y de otros títulos que entrañen obligaciones para las sociedades mercantiles, expresando su serie, valor y monto de la emisión, sus intereses, primas y amortizaciones y todas las circunstancias que garanticen los derechos de los tomadores. Las operaciones a que se refiere el inciso serán inscritas exclusivamente en el Registro Mercantil.



9. Los Agentes, Distribuidores y Representantes.

Los asuntos a que se refieren los incisos anteriores, se anotarán en todas las inscripciones afectadas por el acto de que se trate."

CAPITULO IV

SERVICIOS FINANCIEROS

Artículo 30. Se adiciona la literal q) al artículo 6 del Decreto Número 26-92 del Congreso de la República, Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual queda así:

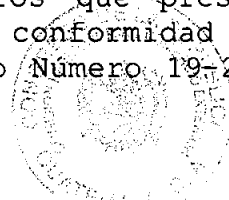
"q) Las rentas que obtengan, para desarrollar sus fines, los fideicomisos que se constituyan de conformidad con el inciso b) del artículo 79 del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República, Ley de Bancos y Grupos Financieros. Las utilidades o dividendos que acuerden distribuir dichos fideicomisos, constituirán renta afecta para las personas que los reciban."

Artículo 31. Se reforma el artículo 73 del Decreto Número 26-92 del Congreso de la República, Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual queda así:

"Artículo 73. Órgano de aplicación. Corresponde a la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, la administración del Impuesto sobre la Renta, que comprende la aplicación, recaudación, fiscalización y control de dicho impuesto."

Artículo 32. Se reforman los numerales 4 y 14, y se adicionan los numerales 16 y 17, al artículo 7 del Decreto Número 27-92 del Congreso de la República, Ley del Impuesto al Valor Agregado, los cuales quedan así:

"4. Los servicios que presten las bolsas de valores autorizadas para operar en el país, así como los servicios que presten los bancos, las sociedades financieras, los almacenes generales de depósito, las casas de cambio y el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, cuya vigilancia e inspección corresponda a la Superintendencia de Bancos, y los servicios financieros que presten los fideicomisos que se constituyan de conformidad con el inciso b) del artículo 79 del Decreto Número 19-2002 del



Congreso de la República, Ley de Bancos y Grupos Financieros. En lo que respecta a la actividad aseguradora y afianzadora, están exentas exclusivamente las operaciones de reaseguro y de reafianzamiento.

14. La venta o permuta de los bienes que realicen los fideicomisos constituidos al amparo del inciso b) del artículo 79 del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República, Ley de Bancos y Grupos Financieros.
16. La venta de activos crediticios a bancos y sociedades financieras.
17. La aceptación o adjudicación en pago, de bienes muebles o inmuebles, a favor de bancos o sociedades financieras."

Artículo 33. Se reforman los numerales 16 y 20, y se adicionan los numerales 21 y 22, al artículo 11 del Decreto Número 37-92 del Congreso de la República, Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos, los cuales quedan así:

- "16. Los créditos y préstamos otorgados por los bancos, sociedades financieras, aseguradoras, afianzadoras y almacenes generales de depósitos, cuya vigilancia e inspección corresponda a la Superintendencia de Bancos, para cualquier destino, y los documentos acreditativos de los mismos.
20. La venta de activos crediticios a bancos y sociedades financieras.
21. La constitución de fideicomisos al amparo del inciso b) del artículo 79 del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República, Ley de Bancos y Grupos Financieros, así como la venta o permuta de los bienes que realicen dichos fideicomisos, incluyendo los actos y operaciones gravados conforme a esta ley, que efectúen dichos fideicomisos para desarrollar sus fines.
22. El pago de dividendos o utilidades que realicen las empresas controladoras a que se refiere el artículo 32 del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República, ley de Bancos y Grupos Financieros."

Artículo 34. Se reforma el primer párrafo del artículo 1 del Decreto Número 26-95 del Congreso de la República, Ley del Impuesto sobre Productos Financieros, el cual queda así:



"Artículo 1. Del Impuesto. Se crea un impuesto específico que grava los ingresos por intereses de cualquier naturaleza, incluyendo los provenientes de títulos-valores, públicos o privados, que se paguen o acrediten en cuenta a personas individuales o jurídicas, domiciliadas en Guatemala.

Se exceptúan los pagos o acreditamientos en cuenta que se efectúen a bancos, sociedades financieras, aseguradoras, afianzadoras, almacenes generales de depósito, casas de cambio y al Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, cuya vigilancia e inspección corresponda a la Superintendencia de Bancos, y, atendiendo a su naturaleza y objeto, los fideicomisos que se constituyan al amparo del inciso b) del artículo 79 del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República, Ley de Bancos y Grupos Financieros."

Artículo 35. Se reforma el artículo 3 del Decreto Número 26-95 del congreso de la República, Ley del Impuesto sobre Productos Financieros, el cual queda así:

"Artículo 3. Del Sujeto Pasivo. Están obligadas al pago del impuesto que establece esta ley, las personas individuales y jurídicas, domiciliadas en el país, que obtengan ingresos por concepto de intereses a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley.

Se exceptúan las entidades a que se hace referencia en el segundo párrafo del artículo 1 de la presente ley."

Artículo 36. Se reforma el artículo 8 del Decreto Número 26-95 del Congreso de la República, Ley del Impuesto sobre Productos Financieros, el cual queda así:

"Artículo 8. De la Retención y del Plazo para Enterar el Impuesto. Las personas individuales o jurídicas que paguen o acrediten en cuenta intereses de cualquier naturaleza, incluyendo los provenientes de títulos valores, públicos y privados, a personas individuales o jurídicas, domiciliadas en Guatemala, retendrán el diez por ciento (10%) con carácter de pago definitivo del impuesto.

Cuando el pago o acreditamiento de intereses que grava la presente ley se efectúe a bancos, sociedades financieras, aseguradoras, afianzadoras, almacenes generales de depósito, casas de cambio y al Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, cuya vigilancia e inspección corresponda a la Superintendencia de Bancos, y a los fideicomisos que se constituyan al amparo del inciso b) del artículo 79 del Decreto

Número 192002 del Congreso de la República, Ley de Bancos y Grupos Financieros, no procede aplicar la retención del impuesto y, por lo tanto, los intereses por ellas percibidos constituyen parte de su renta bruta para efectos del Impuesto sobre la Renta.

Cuando el pago o acreditamiento lo efectúen los bancos, sociedades financieras, aseguradoras, afianzadoras, almacenes generales de depósito, casas de cambio y el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, cuya vigilancia e inspección corresponde a la Superintendencia de Bancos, las retenciones con carácter de pago definitivo del impuesto se aplicarán en forma global sobre la totalidad de los intereses pagados o acreditados a los ahorrantes, depositantes o inversionistas. En estos casos, la Superintendencia de Administración Tributaria no ejercerá un control individual sobre dichas cuentas.

Las retenciones efectuadas por el pago de este impuesto deberán enterarse a las cajas fiscales dentro de los primeros diez (10) día hábiles del mes siguiente al mes calendario en que se efectuaron las mismas. Para el efecto, la Superintendencia de Administración Tributaria proporcionará los formularios correspondientes."

Artículo 37. Se adiciona la literal h)" al artículo 4 del Decreto Número 19-04 del Congreso de la República, Ley del Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz, el cual queda así:

"h) Las empresas controladoras referidas en el artículo 32 del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República, Ley de Bancos y Grupos Financieros."

CAPITULO V

TELECOMUNICACIONES

Artículo 38. Se reforma el Artículo 9 del Decreto 14-71 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 9o. Integración. La Junta Directiva de GUATEL se integra con:



1. Dos personas nombradas por el Presidente de la República, a su elección, y dos suplentes de éstos, nombrados en la misma forma.
2. El Ministro de Gobernación, quien en caso de ausencia o impedimento debe ser sustituido por un Viceministro del ramo;
3. El Ministro de Relaciones Exteriores, quien en caso de ausencia o impedimento debe ser sustituido por un Viceministro del ramo;

En este caso tanto los propietarios como los suplentes preferentemente deben ser abogados, o ingenieros electrónicos, o en telecomunicaciones, o administrador de empresas, ser personas de reconocida honorabilidad, mayores de treinta años, ciudadano en ejercicio de sus derechos y tener experiencia en administración. La Junta Directiva es presidida por una de las personas que designe el Presidente de la República. En caso de ausencia o impedimento de éste, debe ser presidida por el Ministro de Gobernación. En caso de ausencia o impedimento de éste, debe ser presidida, en su orden por el Ministro de Relaciones Exteriores."

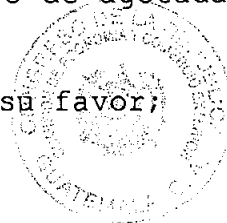
Artículo 39. Se adiciona un nuevo artículo 7 bis al Decreto 94-96 del Congreso de la República, Ley General de Telecomunicaciones y sus Reformas, el cual queda así:

"**Artículo 7 bis.** La Superintendencia de Telecomunicaciones, por medio del Superintendente, podrá exigir a los operadores en el territorio de la República, ofrecer circuitos arrendados que son servicios públicos de telecomunicaciones, a una tarifa plana con precios orientados a costos, en términos y condiciones razonables y no discriminatorios, de conformidad con el reglamento respectivo. "

Artículo 40. Se reforma el Artículo 13 del Decreto 94-96 del Congreso de la República, Ley General de Telecomunicaciones y sus Reformas, el cual queda así:

"**Artículo 13. Ingresos Propios.** La Superintendencia tendrá ingresos propios constituidos por:

- a) Multas cobradas por infracciones cometidas, cuando las mismas se encuentren firmes luego de agotada cualquier impugnación, en su caso;
- b) Donaciones de otras entidades a su favor;



- c) Cualquier otro ingreso que le autorice recaudar la presente Ley;
- d) El producto de las subastas de recursos de numeración, de frecuencias radioeléctricas o de cualquier otro tipo;
- e) Los intereses que generen sus recursos financieros. Los fondos podrán ser invertidos únicamente en instituciones bancarias y financieras autorizadas para operar en el país y supervisadas por la Superintendencia de Bancos."

Artículo 41. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 26 del Decreto 94-96 del Congreso de la República, Ley General de Telecomunicaciones y sus Reformas, el cual queda así:

"La Superintendencia de Telecomunicaciones podrá requerir a los proveedores de telecomunicaciones públicas el registro de los contratos de interconexión que estos celebren."

Artículo 42. Se adiciona el artículo 26 bis al Decreto 94-96 del Congreso de la República, Ley General de Telecomunicaciones y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 26 bis. Desagregación de Redes. Con sujeción a las disposiciones y exclusiones establecidas en los tratados internacionales ratificados por la República de Guatemala, la Superintendencia de Telecomunicaciones podrá exigir que los proveedores en el territorio nacional ofrezcan acceso a los elementos de red de manera desagregada y en términos, condiciones y a tarifas orientadas a costos, que sean razonables, no discriminatorias y transparentes, para el suministro de servicios de telecomunicaciones, todo ello de conformidad con el reglamento respectivo, el cual también deberá determinar qué elementos de red deberán estar disponibles en su territorio y qué proveedores pueden obtener tales elementos de red."

Artículo 43. Se reforma el Artículo 41 del Decreto 94-96 del Congreso de la República, Ley General de Telecomunicaciones y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 41. Plan de numeración. El plan de identificación de las redes comerciales de telecomunicaciones y de los usuarios finales será desarrollado y administrado por la Superintendencia. El acceso a dicha identificación deberá estar

a disponibilidad de todos los operadores de redes comerciales de telecomunicaciones. El registro de telecomunicaciones llevará el inventario de la utilización y disponibilidad de la numeración y de los códigos otorgados.

Los proveedores de servicios de telecomunicaciones deberán proporcionar portabilidad del número, según lo establezca el reglamento respectivo, en la medida en que técnica y económicamente sea factible, en términos y condiciones razonables, así como de manera oportuna."

Artículo 44. Se reforma el Artículo 81 del Decreto 94-96 del Congreso de la República, Ley General de Telecomunicaciones, el cual queda así:

"Artículo 81. Infracciones y multas. Se establecen las infracciones y multas siguientes:

1. Multa de 1,000 a 10,000 UMAS por:

- a) Usar las bandas de frecuencias para radioaficionados en contra de lo estipulado en esta ley.
- b) Causar interferencias comprobadas.
- c) Desconectar ilegalmente a otro operador.
- d) No realizar el registro en cualquiera de los casos establecidos por la ley.

2. Multa de 10,001 a 100,000 UMAS por:

- a) No permitir el acceso a los recursos esenciales, de acuerdo a esta Ley o los Tratados Internacionales ratificados por Guatemala.
- b) Utilizar las bandas de frecuencia reguladas o reservadas sin la obtención previa del derecho de usufructo o del derecho de uso, respectivamente.
- c) Cometer cualquiera de las infracciones establecidas en el numeral 1, reincidente o habitualmente.
- d) Interconectarse a una red de telecomunicaciones sin la autorización o el consentimiento del operador de la red.



- e) Alterar maliciosamente los datos necesarios para cobrar el acceso a recursos esenciales.
 - f) Por activar o poner en funcionamiento terminales de teléfono celular sin autorización respectiva de algún operador o comercializador de servicios de telecomunicaciones.
3. La reincidencia en cualquiera de las infracciones establecidas en los numerales 1 y 2 de este artículo, se sancionará con la multa máxima establecida, y para el caso específico de la literal g) del numeral 2, se faculta a la Superintendencia de Telecomunicaciones para cancelar todas las inscripciones del operador en el registro respectivo, cuando dicho operador reincida en dos o más ocasiones.

La aplicación de cualquier sanción económica establecida en esta Ley se hará sin perjuicio de deducir las responsabilidades penales y civiles que pudieran corresponder."

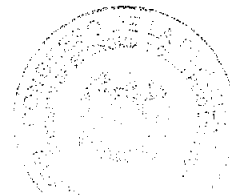
CAPITULO VI

Propiedad Intelectual

Artículo 45. Se reforma parcialmente el artículo 4 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, modificando las definiciones de "Denominación de origen" y "Marca", las cuales se leerán así:

"Artículo 4. Terminología. A los efectos de esta ley se entenderá por:

Denominación de origen: una indicación geográfica usada para designar un producto originario de un país, región o lugar determinado, cuyas cualidades, calidad, reputación o características se deben, exclusiva o esencialmente, al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales, humanos o culturales



Marca:

cualquier signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, sonoro u olfativo que sea apto para distinguir los productos o servicios de una persona individual o jurídica de los de otra y que puede ser objeto de una representación gráfica"

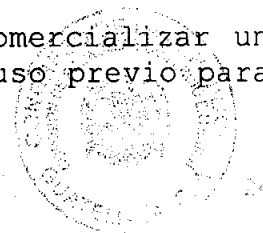
Artículo 46. Se reforma el artículo 16 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 16. Signos que pueden constituir marcas. Las marcas podrán consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Pueden asimismo consistir en marcas sonoras y olfativas, en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes y otros que a criterio del Registro tengan aptitud distintiva.

Las marcas podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean suficientemente arbitrarias y distintivas respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen, y que su empleo no sea susceptible de crear confusión o asociación con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas. Se exceptúa el caso de las marcas colectivas o marcas de certificación, cuando la indicación geográfica identifique a un producto o servicio como originario de un país o de una región o localidad de ese país y determinada calidad, reputación u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar la marca en ningún caso será obstáculo para el registro de la marca.

Será facultativo el empleo de una marca para comercializar un producto o servicio y no será necesario probar uso previo para solicitar u obtener el registro de una marca.



Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro sólo será otorgado para ese producto o servicio.

Cualquier exigencia relativa a la utilización en determinada proporción del nombre común o genérico del producto o servicio que ampare una marca, no deberá menoscabar la capacidad distintiva de esta."

Artículo 47. Se reforma el artículo 22 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 22 Solicitud de Registro. La solicitud de registro de una marca contendrá:

- a) Datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha representación;
- b) Lugar de constitución, cuando el solicitante fuese una persona jurídica;
- c) La marca cuyo registro se solicita y una reproducción de la misma, cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color;
- d) Una traducción simple de la marca, cuando estuviese constituida por algún elemento denominativo y éste tuviese significado en un idioma distinto del español;
- e) Una enumeración de los productos o servicios que distinguirá la marca, con indicación del número de la clase; y
- f) Las reservas o renunciaciones especiales,
- g) En el caso de tratarse de marcas sonoras, indicar una descripción gráfica y adjuntar a la solicitud una reproducción magnética de la misma,
- h) En el caso de tratarse de marcas olfativas, indicar una descripción gráfica y adjuntas a la solicitud la fórmula química o el procedimiento.

- i) País de origen del distintivo."

Artículo 48. Se reforma el artículo 23 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 23. Documentos anexos. Con la solicitud deberá presentarse:

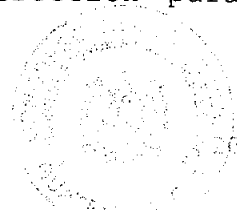
- a) Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en las literales l) y m) del párrafo uno del artículo 20, y en las literales d) y e) del artículo 21, ambos de esta ley, cuando fuese pertinente;
- b) El comprobante de pago de la tasa básica establecida;
- y
- c) Cuatro reproducciones de la marca en caso ésta sea de las mencionadas en el literal c) del párrafo uno del artículo 22 de esta ley.
- d) En el caso de marcas sonoras o auditivas tres ejemplares del soporte material de su reproducción.
- e) En el caso de marcas olfativas, tres ejemplares de las fórmula química o procedimiento."

Artículo 49. Se reforma el artículo 24 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 24. Fecha de presentación de la solicitud. Presentada la solicitud, el Registro anotará la fecha y hora de su presentación, asignará un número de expediente y entregará al solicitante un recibo de la solicitud y de los documentos presentados.

Se tendrá como fecha de presentación de la solicitud la fecha de su recepción por el Registro, siempre que al tiempo de recibirse, la misma hubiera contenido al menos los siguientes requisitos:

- a) Que contenga información que permita identificar al solicitante o su representante e indique dirección para recibir notificaciones en el país;



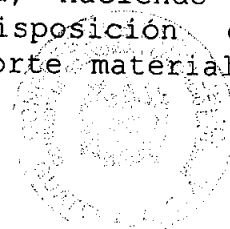
- b) Que indique la marca cuyo registro se solicita o, tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color se acompañará una reproducción de la marca. Tratándose de marcas sonoras o auditivas se acompañará un ejemplar del soporte material de su reproducción y si se trata de marcas olfativas se acompañará un ejemplar del soporte material de la fórmula química o procedimiento.
- c) Que indique los nombres de los productos o servicios para los cuales se usa o se usará la marca; y
- d) Que acompañe el comprobante de pago de la tasa establecida."

Artículo 50. Se reforma el artículo 26 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 26. Publicación de la Solicitud. Una vez efectuado el examen a que se refiere el artículo anterior, sin haberse encontrado obstáculo a la solicitud, o superado éste, el Registro emitirá el edicto correspondiente el que deberá publicarse en el diario oficial por tres veces dentro de un plazo de quince días, a costa del interesado.

El edicto deberá contener:

- a) El nombre y domicilio del solicitante;
- b) El nombre del representante del solicitante, cuando lo hubiese;
- c) La fecha de presentación de la solicitud;
- d) El número de la solicitud o expediente;
- e) La marca tal como se hubiere solicitado; y en el caso de la marca sonora la descripción gráfica, haciendo constar que el Registro tiene a disposición de los interesados un ejemplar del soporte material de su reproducción para consulta; en el caso de la marca olfativa, la descripción gráfica, haciendo constar que el Registro tiene a disposición de los interesados un ejemplar del soporte material de su fórmula química o procedimiento;



- f) La clase a que corresponden los productos o servicios que distinguirá la marca; y
- g) La fecha y firma del Registrador o el funcionario del Registro que éste designe para el efecto.

Dentro del mes siguiente a la fecha de la última publicación del edicto, el solicitante deberá presentar al Registro la parte pertinente de los ejemplares del diario oficial en donde el mismo apareció publicado. El incumplimiento de esta disposición tendrá como efecto que la solicitud se tenga por abandonada de pleno derecho."

Artículo 51. Se reforma el artículo 28 del Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 28. Resolución. Transcurrido el plazo para formular oposición sin que se hubiere presentado alguna, el Registro ordenará que previo pago de la tasa respectiva, se proceda a inscribir la marca y a emitir el certificado de registro.

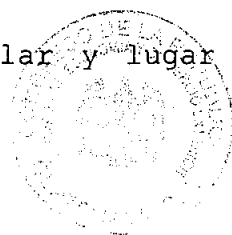
Si se hubiere formulado oposición, dentro del mes siguiente al vencimiento de los plazos establecidos en el artículo 27 de esta Ley, el Registro la resolverá en forma razonada valorando las pruebas aportadas. Si se hubiere presentado más de una oposición, el Registro las resolverá en forma conjunta. Si la resolución fuere favorable a la solicitud y estuviere firme, el Registro procederá conforme se establece en el primer párrafo.

Si dentro del mes siguiente a la fecha en que se hubiese notificado al solicitante la resolución que ordena el registro, no efectuare el pago de la tasa de inscripción, quedará sin efecto la resolución y de pleno derecho operará el abandono de la solicitud."

Artículo 52. Se reforma el artículo 30 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 30. Inscripción de marca y sus efectos. La inscripción de una marca podrá realizarse manualmente o mediante cualquier medio mecánico, electrónico o informático adecuado y deberá contener:

- a) Nombre, domicilio y nacionalidad del titular y lugar de constitución, si fuere persona jurídica;



- b) Nombre del representante del titular, cuando fuese el caso;
- c) La marca registrada si ésta es puramente denominativa y, cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color, se adherirá una reproducción de la misma; en el caso de marcas sonoras o auditivas, se incluirá su representación gráfica o descripción, si fuere el caso, tratándose de marcas olfativas, se incluirá su representación gráfica o descripción, si fuere el caso;
- d) Una lista de los productos o servicios que distingue la marca, con indicación del número de la clase;
- e) Las reservas o renunciaciones especiales relativas a tipos de letras, colores y sus combinaciones;
- f) Las fechas en que se publicó el edicto en el diario oficial;
- g) Si se hubiere invocado prioridad, el nombre del país o de la oficina regional en la cual se presentó la solicitud prioritaria, su fecha de presentación y número, si se le hubiese asignado; y
- h) El número de registro, fecha y la firma del Registrador.

El Registro entregará al titular el certificado de registro de la marca, el que podrá ser una fotocopia certificada de la inscripción y que, en todo caso, deberá contener los datos que aparezcan en la inscripción correspondiente. Una copia del certificado de registro debe agregarse al expediente respectivo.

El registro de una marca se hará sin perjuicio del mejor derecho de tercero y bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante de la misma."

Artículo 53. Se reforma el artículo 35 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 35. Derechos conferidos por el registro de la marca. Sin perjuicio de lo que se disponga en tratados o convenios de los que Guatemala sea Parte, el registro de una marca otorga a

su titular el derecho exclusivo al uso de la misma y los derechos de:

- a) Oponerse al registro de un signo distintivo idéntico o semejante para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes, aún si están comprendidos en otra clase de clasificación marcaria, cuando pudieren causar confusión o riesgo de asociación con esa marca o implicaren un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca o pueda provocar el debilitamiento de su fuerza distintiva, cualquiera que sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo;
- b) Hacer cesar judicialmente el uso, la aplicación o la colocación de la marca o un signo distintivo idéntico o semejante, por parte de un tercero no autorizado:
 - i) para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o bien, para productos o servicios diferentes pero relacionados cuando pudieran causar confusión y también sobre productos que se relacionan con los servicios para los cuales se ha registrado o usado la marca; en el entendido que tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe probabilidad de confusión; o
 - ii) sobre envases, envolturas, empaques, embalajes o acondicionamientos de los productos antes mencionados, cuando esto pudiere provocar confusión o un riesgo de asociación de la marca con ese tercero o el debilitamiento de su fuerza distintiva;
 - iii) para identificar productos iguales o semejantes a los que identifica una marca notoriamente conocida registrada o no, cuando ese uso pudiere causar confusión, o bien, para productos o servicios diferentes, siempre y cuando ese uso pueda indicar una conexión entre esos productos o servicios y el titular de la marca, que

haga probable la lesión de los intereses del titular de la marca notoriamente conocida;

- c) Que las autoridades competentes prohíban o suspendan la importación o internación de productos que estén comprendidos en las situaciones previstas en la literal b) que antecede;
- d) El resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieren causado por el empleo, uso, aplicación, colocación, importación o internación indebidas;
- e) Denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos y acusar criminalmente a los responsables;
- f) Solicitar y obtener las providencias cautelares previstas en esta ley, en los casos mencionados en los literales b) y c) de este párrafo y, también, contra quienes:
 - i. Supriman o modifiquen la marca con fines comerciales, después de que la misma se hubiese aplicado o colocado legítimamente en los productos;
 - ii. Sin autorización del titular fabriquen etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos que reproduzcan o contengan la marca;
 - iii. Rellenen o vuelvan a usar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que lleven la marca con el propósito de dar la apariencia que contienen el producto original; y
 - iv. cometan o intenten cometer actos de competencia desleal en contra suya.
- g) Demandar la intervención de las autoridades competentes, a fin de que se protejan y respeten sus derechos como titular de signos distintivos y también para evitar una posible infracción y los daños económicos o comerciales derivados de una infracción, o del debilitamiento de la fuerza distintiva o del valor comercial de sus marcas, o de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; y

- h) Demandar de la autoridad judicial competente la cancelación o traspaso del registro de un nombre de dominio obtenido de mala fe, cuando constituya la reproducción o imitación de un signo notoriamente conocido, cuyo uso es susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación o debilite o afecte su fuerza distintiva.

Para efectos de lo dispuesto en la literal d) anterior, los siguientes actos, entre otros, constituyen uso o aplicación indebidos de un signo distintivo en el comercio y quienes los cometan incurren en responsabilidad:

1. Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios comprendidos en los casos previstos en las literales b) y f) de este artículo;
2. Importar, exportar, almacenar o transportar dichos productos; y
3. Usar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio en que se realice siempre que produzca un efecto comercial dentro del país, sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables."

Artículo 54. Se reforma el artículo 45 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 45. Licencia de uso de marca. El titular del derecho sobre una marca registrada puede conceder licencia a un tercero para usar la marca. El contrato de licencia debe constar por escrito, pero si es otorgado en idioma distinto al español, el documento deberá ser debidamente legalizado y contar con traducción jurada.

Salvo estipulación en contrario que conste en el contrato de licencia, serán aplicables las siguientes normas:

- a) El licenciatarario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia de su registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio del país y con respecto a todos los productos o servicios para los cuales estuviere registrada la marca;

- h) Demandar de la autoridad judicial competente la cancelación o traspaso del registro de un nombre de dominio obtenido de mala fe, cuando constituya la reproducción o imitación de un signo notoriamente conocido, cuyo uso es susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación, o debilite o afecte su fuerza distintiva.

Para efectos de lo dispuesto en la literal d) anterior, los siguientes actos, entre otros, constituyen uso o aplicación indebidos de un signo distintivo en el comercio y quienes los cometan incurrir en responsabilidad:

1. Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios comprendidos en los casos previstos en las literales b) y f) de este artículo;
2. Importar, exportar, almacenar o transportar dichos productos; y
3. Usar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio en que se realice siempre que produzca un efecto comercial dentro del país, sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables."

Artículo 54. Se reforma el artículo 45 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 45. Licencia de uso de marca. El titular del derecho sobre una marca registrada puede conceder licencia a un tercero para usar la marca. El contrato de licencia debe constar por escrito, pero si es otorgado en idioma distinto al español, el documento deberá ser debidamente legalizado y contar con traducción jurada.

Salvo estipulación en contrario que conste en el contrato de licencia, serán aplicables las siguientes normas:

- a) El licenciatarario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia de su registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio del país y con respecto a todos los productos o servicios para los cuales estuviere registrada la marca;

- b) La licencia no será cedible por el licenciatario, quien tampoco podrá otorgar sub licencias y no será exclusiva, pudiendo el titular otorgar otras licencias;
- c) El licenciatario exclusivo podrá ejercer en nombre propio las acciones legales de protección de la marca, como si fuera el titular de la misma; y
- d) Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el titular no podrá conceder otras licencias en el país respecto de la misma marca, para los mismos productos o servicios, ni podrá usar por sí mismo la marca en el país respecto de esos productos o servicios."

Artículo 55. Se reforma el artículo 46 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 46. Inscripción de la licencia. Si se opta por inscribir la licencia de uso, la solicitud podrá ser presentada por el propietario de la marca o por el licenciatario y deberá contener:

- a) El nombre, razón social o denominación del propietario y del licenciatario y su domicilio;
- b) La marca o marcas objeto de la licencia e indicación de sus registros;
- c) El plazo de la licencia, si lo tuviere;
- d) Indicación de si la licencia es exclusiva o no y condiciones, pactos o restricciones convenidas sobre el uso de la marca; y
- e) Resumen de las disposiciones sobre control de calidad.

A la solicitud deberá acompañarse una copia del contrato de licencia o un resumen del mismo, firmado por las partes, que contenga la información a que se refiere el párrafo anterior, y el comprobante de pago de la tasa correspondiente. Si el contrato de licencia o el resumen del mismo no hubiere sido otorgado en Guatemala, el documento deberá estar debidamente

legalizado y con traducción jurada al español, si fuere el caso.

El contrato de licencia podrá contener disposiciones que aseguren el control, por parte del propietario sobre la calidad de los productos o servicios objeto de la misma, si fuere aplicable.

A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia al titular del registro de la marca y al licenciatario por el plazo común de quince (15) días, el juez competente podrá prohibir el uso de la marca por el licenciatario cuando, por defecto de un adecuado control de calidad o por algún abuso de la licencia, ocurriera o pudiera ocurrir confusión, engaño o perjuicio para el público consumidor.

En lo que se refiere a la materia regulada por esta ley, los contratos de franquicia se regirán también por las disposiciones de este capítulo."

Artículo 56. Se reforma el artículo 47 del Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 47. Trámite de la solicitud. Si la solicitud de inscripción de traspaso o cambio de nombre cumple los requisitos legales, el Registro ordenará que se proceda a efectuar la correspondiente anotación en los libros de registro y en las solicitudes de las marcas afectadas y, asimismo, que se emita un edicto que deberá publicarse a costa del interesado por una vez en el diario oficial. Habiéndose acreditado que se efectuó la publicación, el Registro entregará al interesado una certificación que acredite la inscripción correspondiente.

En el caso de solicitud de inscripción de licencias de uso, establecido el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, el Registro procederá a efectuar la inscripción y a extender certificación de la misma."

Artículo 57. Se reforma el artículo 71 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 71. Derecho sobre el nombre comercial. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio y únicamente con relación al giro o actividad de la empresa, establecimiento o entidad que identifica.

El derecho exclusivo sobre un nombre comercial termina en caso de clausura del establecimiento o suspensión de actividades de la empresa por más de seis meses.

No es necesaria la inscripción del nombre comercial en el Registro, para ejercer los derechos que esta Ley otorga al titular."

Artículo 58. Se reforma el artículo 81 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 81. Titular de una denominación de origen nacional. El Estado de Guatemala será el titular de las denominaciones de origen nacionales y, en consecuencia, a través del Registro velará porque las mismas sean usadas únicamente por las personas o entidades a que se refiere el párrafo dos de este artículo. Por su naturaleza, las denominaciones de origen no podrán ser objeto de enajenación, embargo ni de licencia. Las denominaciones de origen extranjeras, se registrarán por lo dispuesto en los tratados celebrados por la República de Guatemala y sin que ello perjudique la posibilidad de optar por la protección a través de las marcas colectivas o marcas de certificación, si así fuere procedente.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñen su actividad en el lugar designado por una denominación de origen y que cuenten con la correspondiente autorización emitida por el Registro, podrán usar comercialmente la misma en sus productos. El Estado y cualquiera de los productores, fabricantes o artesanos autorizados para usar una denominación de origen, tendrán derecho a oponerse al registro como marca de esa denominación y de impedir el uso de la misma con relación a productos del mismo género que no sean originarios del lugar."

Artículo 59. Se reforma el artículo 82 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 82. Prohibiciones. No podrá registrarse como denominación de origen un signo:

- a) Que no corresponda a la definición de denominación de origen contenida en el artículo 4 de esta ley;

- b) Que sea contrario a las buenas costumbres, a la moral o al orden público, o que pudiera inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o, cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos;
- c) Que constituya la denominación común o genérica de algún producto, estimándose común o genérica una denominación cuando sea considerada como tal tanto por los conocedores de ese tipo de producto o servicio como por el público en general;
- d) Que sea confusamente similar a una marca solicitada previamente de buena fe y en trámite de registro; o
- e) Que sea confusamente similar a una marca registrada con anterioridad y vigente de conformidad con esta ley.

Podrá registrarse una denominación de origen acompañada del nombre genérico del producto o servicio respectivo o una expresión relacionada con ese producto, pero la protección no se extenderá al nombre genérico o expresión empleados."

Artículo 60. Se reforma el artículo 96 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 96. Aplicación industrial. Una invención se considerará susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado y tenga utilidad específica, sustancial y creíble en cualquier tipo de industria o actividad productiva. A estos efectos, por industria se entenderá en sentido amplio e incluirá, entre otros, la artesanía, la agricultura, la ganadería, la manufacturera, la construcción, la minería, la pesca y los servicios."

Artículo 61. Se reforma el artículo 103 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 103. Solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona individual o jurídica. La solicitud de patente de invención deberá presentarse al Registro y deberá contener:

- a) Los datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha representación;

- b) Lugar de constitución cuando fuese una persona jurídica; y
- c) El nombre de la invención y del inventor y su dirección.

Podrá reconocerse los efectos derivados de la presentación de una solicitud internacional cuando así se establezca en un tratado o convenio del que Guatemala sea Parte. En tal supuesto, lo relativo al examen de forma, publicación de la solicitud y cualquier otro aspecto de procedimiento se regirá por las disposiciones del tratado o convenio y por el Reglamento específico que a tal efecto apruebe el Organismo Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Economía."

Artículo 62. Se reforma el artículo 108 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 108. Descripción. La descripción deberá divulgar la invención reivindicada de manera suficientemente clara y completa, de modo que una persona experta en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción también deberá divulgar la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar la invención reivindicada.

Una invención objeto de solicitud de patente se considerará suficientemente apoyada en su divulgación, cuando de la descripción pueda una persona experta en la materia técnica correspondiente confirmar razonablemente que el solicitante de la patente estuvo en posesión de la invención a la fecha de presentación de su solicitud, o bien, a la fecha de presentación de la solicitud prioritaria."

Artículo 63. Se reforma el artículo 109 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 109. Descripción de material biológico. Cuando la invención se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un material biológico, que no se encuentre a disposición del público y la invención no pueda describirse de manera que pueda comprenderse y ser ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, se complementará la descripción mediante el depósito de una muestra de dicho material.

El depósito de la muestra del material biológico deberá efectuarse en una institución de depósito establecida dentro o

fuera del país y reconocida de conformidad con los tratados o convenios de los que Guatemala sea Parte, a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud o, cuando se invoque un derecho de prioridad, en la fecha de presentación de la solicitud prioritaria, debiendo acreditarse con la documentación pertinente.

Cuando se efectuare un depósito de material biológico para los efectos de una solicitud de patente, ello se indicará en la descripción junto con el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del depósito y el número de depósito atribuido por la institución. También se describirá la naturaleza y características del material depositado cuando ello fuese necesario para efectos de la divulgación de la invención.

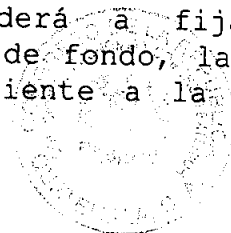
El depósito de material biológico sólo será válido para efectos de la concesión de una patente si se hace bajo condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material, a más tardar a partir de la fecha de publicación de la solicitud de patente correspondiente."

Artículo 64. Se reforma el artículo 113 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 113. Examen de forma. El Registro examinará si la solicitud cumple con los requisitos de los artículos 103 y 105 de esta ley. En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, y dentro de un plazo que no exceda de un mes contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud, el Registro deberá requerir al solicitante que efectúe la corrección necesaria o presente los documentos omitidos. Si el solicitante no cumple con lo requerido dentro de un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de la notificación, se tendrá por abandonada la solicitud."

Artículo 65. Se reforma el artículo 117 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 117. Examen de fondo. Transcurridos tres meses después de la fecha de publicación del edicto, o de notificadas al solicitante de la patente las observaciones presentadas, si fuese el caso, el Registro procederá a fijar la tasa correspondiente para cubrir el examen de fondo, la cual deberá hacerse efectiva dentro del mes siguiente a la fecha de la



notificación al solicitante de la orden de pago respectiva, pues de lo contrario la solicitud se tendrá por abandonada.

Posteriormente, procederá a efectuar el examen de fondo de la solicitud, previa presentación por el solicitante del comprobante del pago de la tasa fijada, el que tendrá por objeto determinar si la invención reivindicada se ajusta a lo que disponen los artículos 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 107, 108, 109, 110, y 111 de esta ley, así como lo que establece el artículo 104, cuando fuere pertinente.

El examen podrá ser realizado por el Registro directamente, mediante el concurso de técnicos del Registro de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Economía con la colaboración de técnicos independientes o con la colaboración de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Al realizar el examen de fondo, se tomarán en cuenta las informaciones aportadas por el solicitante o, en su caso, por quien haya formulado oposiciones, incluyendo lo relativo al informe de búsqueda y al reporte del examen de fondo efectuado por el examinador, así como los exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados por otras oficinas de propiedad industrial y referidos a la misma materia de la solicitud. El Registro podrá considerar los resultados de tales exámenes como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.

La cuestión de si una reivindicación es o no patentable por falta de novedad o nivel inventivo, se resolverá caso por caso según corresponda, considerando los hechos pertinentes como por ejemplo, entre otros:

- a) El alcance y contenido del estado de la técnica;
- b) Las diferencias entre el estado de la técnica y la reivindicación;
- c) El nivel de destreza común en el arte pertinente; y
- d) Factores secundarios apropiados como el éxito comercial, necesidades largamente sentidas pero no resueltas, el fracaso de otros y resultados inesperados."

Artículo 66. Se reforma el artículo 118 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, el cual queda así:



"Artículo 118. Otros documentos. Para los efectos del examen de fondo, el Registro podrá requerir al solicitante que presente, dentro de un plazo de tres meses contados a partir de la notificación respectiva, una copia sin legalización y con traducción simple de cualquier material contenido en un expediente administrativo o judicial del extranjero, relacionado con la solicitud en trámite, incluyendo, entre otras:

- a) La propia solicitud;
- b) Los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad;
- c) La patente u otro título de protección que se hubiese concedido;
- d) Cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado, denegado u otorgado la solicitud o patente; y
- e) Cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese revocado, anulado, invalidado o cancelado la patente u otro título de protección concedido.

A pedido del solicitante o bien de oficio, el Registro podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse por el solicitante, conforme a este artículo, no se hubiese emitido en el país de que se trate.

El solicitante podrá, respecto a la información o documentos que proporcione, formular las observaciones y comentarios que estime pertinentes.

Si el examen de fondo resultare que previo al otorgamiento de la patente es necesario completar la documentación presentada, corregir, modificar o dividir la solicitud, el Registro lo notificará al solicitante para que, dentro de los tres meses siguientes, cumpla con lo requerido o presente los comentarios o documentos que convinieran en sustento de la solicitud. Este procedimiento podrá realizarse cuantas veces lo estime necesario el Registro. En caso de no presentar los comentarios o documentos requeridos, en los plazos establecidos en este artículo, se tendrá por abandonada la solicitud de pleno derecho."

Artículo 67. Se reforma el artículo 119 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 119. Resolución sobre la solicitud de patente. Cumplidos los trámites y requisitos que establece esta ley, el Registro resolverá sobre la solicitud de patente. Si ésta fuere rechazada total o parcialmente, la resolución respectiva deberá contener los motivos y fundamentos jurídicos de tal rechazo.

Si se resolviera concediendo la patente solicitada, el Registro ordenará que se proceda a la inscripción correspondiente, previa acreditación del pago de la tasa de inscripción dentro del mes siguiente a la notificación de la resolución de concesión.

En el caso que la patente sea otorgada parcialmente, el Registro ordenará en la propia resolución que el solicitante presente dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la resolución, el documento relativo a las reivindicaciones de conformidad con lo aprobado.

La inscripción deberá contener:

- a) El número del expediente;
- b) La fecha de presentación de la solicitud;
- c) El nombre y domicilio del solicitante y del inventor;
- d) El símbolo o símbolos de clasificación, cuando se hubiesen asignado;
- e) El nombre de la invención;
- f) Un resumen, en los términos que establece el artículo 112 de esta ley;
- g) Un dibujo representativo de la invención, si lo hubiere, seleccionado por el Registro;
- h) El país u oficina, fecha y número de solicitudes cuya prioridad se hubiesen reclamado;
- j) La firma y sello del Registrador.
- k) Declarar el nombre genérico, cuando se trate de medicamentos.

- 1) Declarar el número de CAS (Chemical Abstrac Service), cuando se trate de medicamentos."

Artículo 68. Se reforma el artículo 126 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 126. Vigencia de la patente. La patente de invención tendrá vigencia por un plazo de veinte (20) años, contado desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud de patente.

Para aquellos casos, en los cuales la República de Guatemala ocurra en un retraso administrativo imputable al Registro, el plazo de vigencia de la Patente de invención será compensado a criterio del Registro, siempre y cuando el que fundamente ese derecho sea parte de Acuerdos y Convenios Internacionales que contengan una disposición en ese sentido. A esos efectos se deberá tomar en consideración los Tratados y Convenios Internacionales, de los cuales Guatemala sea parte."

Artículo 69. Se reforma el artículo 139 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 139. Nulidad de la patente. La patente será nula en cualquiera de los siguientes casos:

- a) Total o parcialmente, cuando la invención no se ajuste a lo dispuesto en los artículos 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 108, 109, 110, y 111 de esta ley;
o
- b) Si durante la tramitación de la solicitud hubiese ocurrido uno de los casos en que la misma debió tenerse por abandonada.

Una patente podrá ser anulada en caso de fraude o cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a ella. Esta acción podrá ser iniciada por la persona a quien pertenezca la invención.

Quando una causal de nulidad o anulabilidad se refiera a una o algunas reivindicaciones de la patente, los efectos de la declaración judicial no afectarán al resto de las reivindicaciones."

Artículo 70. Se reforma el artículo 184 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 184. Cálculo de indemnización. La indemnización de daños y perjuicios que proceda como consecuencia de los procesos regulados por esta ley se calculará, entre otros, en función de los criterios siguientes:

- a) Según el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción, de la explotación del registro o de la patente nula o anulada o de los actos de competencia desleal;
- b) Según el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de que motivaron la acción; o
- c) Según el precio que el demandado habría tenido que pagar por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido.

En el caso de infracción de marcas, el titular del derecho podrá optar por que la indemnización equivalga a un máximo de diez veces el valor comercial que tendría cada una de las mercancías infractoras objeto de comiso, confiscación o embargo si éstas fueren productos legítimos. Dicha indemnización será tasada por la autoridad judicial correspondiente del domicilio del demandado."

Artículo 71. Se reforma el artículo 185 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 185. Contenido de la sentencia. La sentencia que declare con lugar alguna de las acciones previstas en esta ley, además de resolver sobre el fondo del asunto, deberá, según el caso y teniendo en cuenta la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción, las medidas ordenadas y los derechos de terceros:

- a) Ordenar que las mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, retiradas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o no ingresen a los circuitos comerciales después de su despacho en aduana, o no

sean objeto de exportación, o que sean destruidas como objetos de ilícito comercio, principalmente cuando afecten o puedan afectar la salud o la vida de las personas o de los animales, la preservación de los vegetales, o bien cuando pudiesen causar daños graves al medio ambiente;

- b) Disponer que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente en la producción de las mercancías infractoras, sean apartados de los circuitos comerciales o destruidos como objetos de ilícito comercio, sin indemnización alguna para su propietario, como medio para reducir al máximo los riesgos de nuevas infracciones;
- c) Prohibir que las mercancías infractoras ingresen a los circuitos comerciales;
- d) Disponer que las mercancías infractoras puedan ser entregadas gratuitamente por el juez a entidades no lucrativas, privadas o públicas, para que puedan utilizarlas exclusivamente en obras o actividades de beneficencia social, siempre que cuente con la autorización del titular del derecho, excepto cuando se asegure la previa eliminación o retiro de los signos distintivos y la misma ya no sea identificable con la marca removida;
- e) Disponer que cesen los actos infractores o de competencia desleal y que se tomen las medidas necesarias para impedir sus consecuencias y para evitar su repetición, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios.
- f) Conminar al infractor, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia, proporcionar toda información relativa a otras personas involucradas en la infracción, o bien, respecto a los medios de producción o canales de distribución de las mercancías infractoras."

Artículo 72. Se reforma el artículo 186 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 186. Procedimiento. Quien inicie o pretenda iniciar una acción relativa a derechos de propiedad industrial, o bien, con motivo de la comisión de actos e competencia desleal de

conformidad con lo establecido en esta ley, podrá pedir al juez competente que ordene cualquier providencia cautelar que estime conveniente con el objeto de proteger sus derechos, impedir o prevenir la comisión de una infracción, evitar sus consecuencias y obtener o conservar pruebas. El juez en la misma resolución en la que decreta las medidas solicitadas podrá requerir al actor que previamente a su ejecución preste fianza u otra garantía suficiente para proteger a la parte afectada por la medida y a la propia autoridad y asimismo para impedir abusos.

Las providencias cautelares podrán también pedirse con posterioridad a la presentación del memorial de demanda. Cuando la providencia no se solicita previamente, sino con la demanda o posterior a ésta no será necesario constituir garantía alguna.

El juez deberá ordenar y ejecutar las medidas que le solicitasen dentro del improrrogable plazo de dos días, siempre que el actor o peticionario hubiere acompañado prueba de la titularidad del derecho infringido y evidencia de la que resulten indicios que permitan razonablemente presumir la infracción o la inminencia de ésta. En el supuesto que se requiera garantía, el plazo establecido al inicio de este párrafo será de cuarenta y ocho horas contados a partir de la presentación de la fianza o garantía requerida.

Al dictar la providencia cautelar pertinente, en el caso de un patente de invención, se presumirá que ésta es válida."

Artículo 73. Se reforma el artículo 190 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 190. Medida cautelar en frontera. El titular de un derecho protegido por esta ley relativo a marcas de fábrica o de comercio, o su licenciatario, que tenga indicios suficientes de una presunta importación o exportación de mercancías que lesionen o infrinjan sus derechos, podrá pedir a las autoridades judiciales que se ordene a la aduana respectiva suspender el despacho e internación o el proceso de exportación de las mismas.

No obstante lo anterior, la autoridad aduanera podrá solicitar de oficio ante la autoridad judicial competente la medida cautelar en frontera, cuando una mercancía importada, exportada o en tránsito, se sospeche que infringe un derecho de propiedad

intelectual, sin requerir solicitud formal de un privado o del titular del derecho."

Artículo 74. Se reforma el artículo 191 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 191. Competencia y contenido de la solicitud. Será competente para conocer de la solicitud de la medida en frontera el juez de primera instancia que tenga jurisdicción en el territorio en donde se ubique la aduana correspondiente. En todo caso, además de las disposiciones especiales contenidas en esta sección, serán aplicables a las disposiciones y el procedimiento establecido en esta ley para el caso de las providencias cautelares.

Además de los requisitos pertinentes, en la solicitud de medidas en frontera el peticionario deberá:

- a) Aportar pruebas de las que se desprendan indicios razonables de la supuesta infracción; y
- b) Describir en forma suficientemente detallada las mercancías legítimas y la naturaleza de las que se presume serán importadas o exportadas, a fin de que éstas puedan ser reconocidas fácilmente por las autoridades aduaneras

El juez podrá, previamente a resolver, requerir al solicitante que presente pruebas o informaciones adicionales. En todo caso, el cumplimiento de este requisito y el contemplado en el literal b) anterior, no deberá ser irrazonable a efecto que el trámite sea expedito."

Artículo 75. Se reforma el artículo 194 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 194. Derecho de inspección e información. Sin perjuicio de la obligación de brindar protección a la información confidencial, las autoridades judiciales que ordenaren la medida en frontera, podrán autorizar a quien las promovió el libre acceso a las mercancías o productos retenidos, a fin de que pueda inspeccionarlas y obtener medios adicionales de prueba en apoyo de su reclamo. Igual derecho tendrá el importador o exportador. Esta medida se realizará en presencia de la autoridad judicial respectiva, con citación de la parte contraria.

En todo caso, siempre que la autoridad determine que las mercancías o productos retenidos infringen una marca, deberá comunicar al titular del derecho toda la información relativa al nombre o identificación del consignador, el consignatario o del importador, incluyendo su dirección y la cantidad de mercancía infractora."

Artículo 76. Se adiciona la definición de "Productor de fonogramas" y se modifican las definiciones de "Comunicación al Público", "Publicación" y "Radiodifusión" del artículo 4 del Decreto 33-98 del Congreso de la República, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y sus Reformas, las cuales se leerán así:

"Artículo 4. Para efectos de esta ley se entiende por:

Comunicación al público: Todo acto por el cual una o más personas, reunidas o no en un mismo lugar, al mismo o en distinto tiempo, incluso en el momento que cada una de ellas elija, puedan tener acceso a una obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, por cualquier medio o procedimiento, análogo o digital, conocido o por conocerse, que sirva para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes por un medio que no sea la radiodifusión. Todo proceso necesario y conducente a que la obra sea accesible al público constituye comunicación.

Productor de fonogramas: Significa la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad de la primera fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación u otros sonidos o las representaciones de sonidos.

Publicación: El hecho de poner a disposición del público, con la autorización del titular del derecho, copias de una obra o de un fonograma en cantidad suficiente.

Radiodifusión:

La transmisión inalámbrica o por satélite de sonidos o imágenes y de las representaciones de estos, para su recepción por el público, incluyendo la transmisión inalámbrica de señales codificadas cuando los medios de decodificación sean ofrecidos al público por el organismo de radiodifusión o con su consentimiento."

Artículo 77. Se reforma el artículo 53 del Decreto 33-98 del Congreso de la República, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 53. Los artistas intérpretes o ejecutantes, y sus derecho-habientes tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la fijación, la reproducción, la comunicación al público por cualquier medio, la radiodifusión o cualquier otra forma de utilización de sus interpretaciones y ejecuciones, así mismo gozan del derecho de autorizar la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, excepto cuando la interpretación o ejecución constituya por si misma una ejecución o interpretación radiodifundida; y la fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no fijadas. Se exceptúan de esta disposición los intérpretes de obras audiovisuales.

Cuando un fonograma publicado con fines comerciales se utilice en cualquier forma de comunicación pública, los artistas intérpretes o ejecutantes, cuyas actuaciones se hayan fijado en aquél, tendrán derecho a una compensación económica."

Artículo 78. Se reforma el artículo 128 del Decreto 33-98 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y sus Reformas, las cuales quedan así:

"Artículo 128. El Ministerio Público, de oficio o a solicitud del titular del derecho o agraviado, al tener conocimiento de un acto ilícito, dentro de los plazos que correspondan según las disposiciones del Código Procesal Penal, deberá requerir al Juez competente que autorice cualesquiera de las providencias cautelares establecidas en esta ley o en el citado Código, que resulten necesarias para salvaguardar los derechos reconocidos y protegidos por esta ley, y en los tratados internacionales sobre la materia de los que la República de Guatemala sea parte, y que estén resultando infringidos o bien, cuando su

violación sea inminente. A tales efectos, el Ministerio Público estimará procedente solicitar las providencias cuando las circunstancias del caso e indicios con que cuente, hagan presumir que la infracción se ha realizado o exista riesgo de que se realice.

Presentada la solicitud ante el Juez que corresponda, éste estará obligado a decretarlas con carácter de urgente de conformidad con las disposiciones procesales aplicables, autorizando al Ministerio Público para que proceda a su ejecución con el auxilio de la autoridad policiaca necesaria."

Artículo 79. Se reforma el literal b) artículo 128 bis del Decreto 33-98 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 128 bis. Se podrán decretar como medidas cautelares las siguientes:

- a) Cesación de los actos ilícitos o comercio ilegal de la obra protegida en forma inmediata;
- b) El allanamiento y registro de inmuebles públicos o privados, abiertos o cerrados, el que se efectuará de conformidad a lo establecido al respecto en el Código Procesal Penal, incluido el registro o inspección de equipo de cómputo u ordenadores para establecer el uso o reproducción lícita de programas de ordenador conforme lo establecido en el artículo 32 de esta Ley;
- c) El embargo de bienes muebles e inmuebles y, entre otros, de las cuentas bancarias a nombre de las empresas o personas individuales señaladas como posibles autores o cómplices responsables del acto ilícito denunciado y el embargo del producto neto de los ingresos del posible infractor;
- d) El secuestro o comiso inmediato de las copias o ejemplares ilícitamente elaboradas de obras o fonogramas, o bien, de mercancías que de forma ilícita incorporan obras o fonogramas; los instrumentos empleados para producirlas, transportarlas, conservarlas, distribuirlas, ofertarlas para la venta, rentarlas o comunicarlas al público de cualquier forma. Los bienes en comiso o secuestrados quedarán en depósito del Ministerio Público;
- e) La suspensión del despacho en aduanas de copias o ejemplares ilícitamente elaboradas de obras o fonogramas,

o el secuestro de mercancías que de forma ilícita incorporan obras o fonogramas, que vayan a ser internadas en Guatemala, las que quedarán en depósito de las autoridades aduaneras;

- f) La orden de revisión de los registros contables de las personas individuales o jurídicas señaladas como posibles responsables del acto ilícito;
- g) El secuestro de los registros contables o de los equipos de cómputo que los contengan, de las personas individuales o jurídicas señaladas como posibles responsables del acto ilícito;
- h) La clausura temporal del local o cierre temporal del negocio en el cual se encuentren copias ilícitas de obras o fonogramas o cualquier mercadería infractora o medios e instrumentos empleados para producirlas. Esta medida se mantendrá por el plazo necesario para asegurar las resultas del proceso y no podrá levantarse en tanto exista riesgo de que se repita la infracción u otra violación a los derechos establecidos en esta ley y en los tratados en materia de derecho de autor y derechos conexos de los que sea parte Guatemala; e
- i) Las medidas cautelares o precautorias, medios auxiliares o medidas de coerción que, según las circunstancias, parezcan más idóneas para asegurar provisionalmente la cesación del ilícito, la protección de los derechos reconocidos en esta ley, o la preservación de las evidencias o pruebas relacionadas con una violación real o inminente.

Los instrumentos y objetos del delito que hubieren caído en comiso o secuestro, se tendrán como evidencia en contra de los responsables del acto ilícito."

Artículo 80. Se reforma el artículo 129 del Decreto 33-98 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 129. Cuando el titular de un derecho protegido por esta ley tuviere motivos fundados para suponer que se prepara una importación o exportación de productos que infringen su derecho, podrá:

- a) Solicitar a las autoridades aduanales correspondiente la suspensión de la importación o exportación de que

se trate, por un plazo no mayor de diez días hábiles;
o

- b) Solicitar al Juez competente que ordene a las autoridades de aduanas suspender el despacho de esa importación o exportación.

No obstante lo anterior, la autoridad aduanera podrá solicitar de oficio ante la autoridad judicial competente la medida en frontera, cuando una mercancía importada, exportada o en tránsito, se sospeche que infringe un derecho protegido por esta Ley, sin requerir solicitud formal de un privado o del titular del derecho."

Artículo 81. Se reforma el artículo 130 del Decreto 33-98 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 130. El titular del derecho que solicite las medidas en frontera a que se refiere el artículo 129 de esta ley, deberá proporcionar a las autoridades aduanales o al juez competente, pruebas suficientes que demuestren que existe presunción de infracción o la información necesaria sobre la infracción cometida; además, una descripción suficientemente precisa de los ejemplares ilícitos de la obra o fonograma protegido para que éstos puedan ser reconocidos con facilidad. A la solicitud que se presente serán aplicables las disposiciones y garantías relativas a las medidas precautorias establecidas para los procedimientos civiles.

Ejecutada la suspensión de la importación o exportación de las mercancías consideradas infractoras, la autoridad aduanera que la haya dictado lo notificará inmediatamente al importador o exportador de las mismas y al solicitante de la medida.

Transcurridos diez días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación al solicitante sin haber recibido orden de juez competente para mantenerla vigente, la autoridad aduanera levantará de oficio la suspensión y ordenará el despacho de las mercancías retenidas. El incumplimiento en el levantamiento puntual de la suspensión causará la responsabilidad del funcionario responsable.

Sin perjuicio de la obligación de brindar protección a la información confidencial, las autoridades que ordenaren la medida en frontera, podrán autorizar a quien las promovió el libre acceso a las mercancías o productos retenidos, a fin de que pueda inspeccionarlas y obtener medios adicionales de

prueba en apoyo de su reclamo. Igual derecho tendrá el importador o exportador. Esta medida se realizará en presencia de la autoridad respectiva, con citación de la parte contraria. En todo caso, siempre que la autoridad determine que las mercancías o productos retenidos infringen un derecho protegido por esta Ley, estará facultada para comunicar al titular del derecho toda la información relativa al nombre o identificación del consignador, e consignatario o del importador, incluyendo su dirección y la cantidad de mercancía infractora"

Artículo 82. Se adiciona el artículo 133 quinquies al Decreto 33-98 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 133 quinquies. Sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera derivar por la infracción al derecho de autor o a un derecho conexo, será responsable civilmente y ser objeto de cualquiera de las medidas de garantía y providencias de urgencia establecidas en los artículos anteriores toda persona que:

- a) eluda o pretenda eludir sin autorización una medida tecnológica implementada por el autor o el titular del derecho, o bien, por los artistas intérpretes o ejecutantes o por un productor de fonogramas, en el ejercicio de sus respectivos derechos y con el fin de restringir o controlar el acceso a las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas protegidos u otra materia protegida; o
- b) fabrique, importe, distribuya, venda, ofrezca para la venta o de cualquier otra forma comercialice o proporcione al público dispositivos, productos o componentes:
 - i) que permitan eludir una medida tecnológica efectiva a que se refiere el literal a) precedente;
 - ii) que tengan un limitado propósito o uso de importancia comercial diferente a eludir una medida tecnológica efectiva; o
 - iii) que han sido diseñados, producidos o ejecutados con el fin de permitir o facilitar eludir cualquier medida tecnológica efectiva.

Por medida tecnológica efectiva se entenderá cualquier tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de su operación, controla el acceso a una obra, una interpretación o ejecución, un fonograma o cualquier otra materia protegida, o bien, que protege cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo."

Artículo 83. Se adiciona el artículo 133 sexties al Decreto 33-98 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 133 sexties. Se establecen los siguientes casos de excepción a lo previsto en el artículo 133 quinquies, a condición que no afecten la protección legal que corresponda a las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas o la efectividad de las medidas legales previstas en caso de evasión de medidas tecnológicas efectivas:

- a) Actividades no infractoras de ingeniería inversa respecto a la copia legítimamente adquirida de un programa de ordenador, realizadas de buena fe y con respecto a elementos particulares de dicho programa que no han estado a disposición de la persona involucrada en esas actividades, que tengan como único propósito lograr la interoperabilidad de un programa de ordenador creado independientemente con otros programas;
- b) Actividades de buena fe no infractoras realizadas por un investigador calificado que ha obtenido legítimamente una copia, ejecución o muestra de obra, interpretación o ejecución no fijada o fonograma, cuando haya desarrollado un esfuerzo de buena fe para obtener autorización para realizar dichas actividades, en la medida necesaria y con el único propósito de identificar y analizar fallas y vulnerabilidades de las tecnologías para codificar y decodificar la información;
- c) La inclusión de un componente o parte en una tecnología, producto, servicio o dispositivo que por sí mismo no se encuentre prohibido conforme lo establecido en el literal b) del artículo anterior, cuando tenga como único fin el prevenir el acceso de menores de edad a contenido inapropiado en línea;
- d) Las actividades realizadas de buena fe no infractoras autorizadas por el propietario de un ordenador, sistema o red de cómputo y que tengan como único propósito probar,

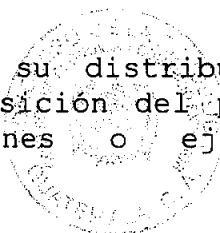
investigar o corregir la seguridad de ese ordenador, sistema o red de cómputo;

- e) Actividades que permitan a una biblioteca, archivo o institución educativa sin fines de lucro tener acceso a una obra, interpretación o ejecución o un fonograma, a los cuales no tendrían acceso de otro modo y con el único fin de tomar decisiones sobre su adquisición;
- f) Actividades no infractoras que tengan el propósito de identificar y deshabilitar la capacidad de compilar o diseminar información de datos personales de identificación no divulgados, que reflejen las actividades en línea de una persona natural y de una manera que no afecte de ningún otro modo la capacidad de otra persona de obtener acceso a cualquier obra;
- g) Actividades legalmente autorizadas realizadas por empleados públicos, agentes o contratistas gubernamentales que tengan por fin el implementar una ley o actividades de inteligencia, seguridad o propósitos similares."

Artículo 84. Se adiciona el artículo 133 *septies* al Decreto 33-98 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 133 *septies*. Sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera derivar por la infracción al derecho de autor o a un derecho conexo, será responsable civilmente y ser objeto de cualquiera de las medidas de garantía y providencias de urgencia establecidas en esta ley toda persona que sin autorización y teniendo conocimiento que podría inducir, permitir, facilitar o encubrir una infracción de un derecho de autor o de un derecho conexo, o bien, cuando derivado de acciones civiles promovidas tuviere motivos razonables para saberlo:

- a) suprima o altere cualquier información sobre la gestión de derechos;
- b) distribuya o importe para su distribución información sobre gestión de derechos, teniendo conocimiento que esa información ha sido suprimida o alterada sin autorización; o
- c) distribuya, importe para su distribución, transmita, comunique o ponga a disposición del público copias de obras, de interpretaciones o ejecuciones o de



fonogramas, teniendo conocimiento que la información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.

No aplicará lo anterior en aquellos casos de actividades legalmente autorizadas y realizadas por empleados públicos, agentes o contratistas gubernamentales que tengan por fin el implementar una ley o actividades de inteligencia, seguridad o propósitos similares.

Por información sobre la gestión de derechos se entenderá:

- i) la información que identifica la obra, la interpretación o ejecución o el fonograma, al autor de la obra, al artista intérprete o ejecutante, al productor del fonograma o a cualquier otro titular de un derecho protegido sobre la obra, la interpretación o ejecución o el fonograma;
- ii) la información sobre los términos y condiciones de utilización de la obra, interpretación o ejecución o fonograma; o
- iii) cualquier número o código que represente dicha información; siempre que cualquiera se encuentre adjunto a un ejemplar de la obra, interpretación o ejecución o fonograma, o bien, figuren en relación con su comunicación o puesta a disposición del público; cuando tal información, número o código forme parte de un ejemplar de una obra, interpretación o ejecución o un fonograma, o bien, figuren en relación con la comunicación pública o puesta a disposición del público de la obra, de la interpretación o ejecución o del fonograma."

Artículo 85. Se reforma el literal a) del artículo 134 bis, del Decreto 33-98 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 134 bis. La sentencia que declare con lugar alguna de las acciones previstas en esta ley, además de resolver sobre el fondo del asunto, según el caso y teniendo en cuenta la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción, las medidas ordenadas y los derechos de terceros, deberá:

- a) Ordenar que las mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas del comercio de forma

que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas como objetos de ilícito comercio, o según el caso, que no ingresen a los círculos comerciales después de su despacho en aduana, o no sean objeto de exportación. Cuando se trate de prendas de vestir, previa autorización del titular del derecho afectado podrá el Juez ordenar que si lo estima conveniente, que sean entregadas gratuitamente a entidades no lucrativas, privadas o públicas para que puedan utilizarlas exclusivamente en obras o actividades de beneficencia social, debiendo quedar constancia escrita de la entrega; no será necesaria la autorización del titular del derecho, si la eliminación o retiro del elemento infractor asegure que las mercancías no serán identificables o relacionadas con el derecho tutelado.

- b) Disponer que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente en la producción de las mercancías infractoras, sean apartados del comercio y, cuando así se estime conveniente, que sean entregadas gratuitamente por el Juez a entidades no lucrativas, privadas o públicas, para que puedan utilizarlas exclusivamente en obras o actividades de beneficencia social, sin indemnización alguna para su propietario, debiendo quedar constancia escrita de la entrega;
- c) Prohibir que las mercancías infractoras ingresen al comercio;
- d) Disponer que cesen los actos infractores y que se tomen las medidas necesarias para impedir sus consecuencias y para evitar su repetición, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios."

Artículo 86. Se adiciona el artículo 134 ter al Decreto 33-98 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 134 ter. El titular del derecho infringido podrá optar por que la indemnización equivalga a diez veces el valor comercial que tendría cada una de las mercancías infractoras objeto de comiso, confiscación o embargo si éstas fueren productos legítimos.

No procederá la condena de daños y perjuicios contra una biblioteca, archivo, institución educativa u organismo público de radiodifusión sin fines de lucro, que tenga la carga de la

prueba para demostrar que desconocía y carecía de motivos para saber que sus actos constituían una actividad prohibida o infractora, de conformidad con lo previsto en la presente Ley."

Artículo 87. Se reforma el artículo 274 del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 274. Violación al derecho de autor y sus derechos conexos. Salvo los casos de excepción contemplados expresamente en las leyes o tratados sobre la materia de los que Guatemala sea parte, será sancionado con prisión de uno a cuatro años y multa de cincuenta mil a setecientos cincuenta mil quetzales, quien realizare cualquiera de los actos siguientes:

- a) La atribución falsa de la calidad de autor y/o titular de un derecho de autor, o de artista, intérprete o ejecutante, de productor de fonograma o de un organismo de radiodifusión;
- b) La deformación, mutilación, modificación o cualquier atentado que cause perjuicio a la integridad de la obra o al honor y reputación del autor;
- c) La reproducción de cualquier obra, de una interpretación o ejecución, de un fonograma o de una emisión, sin la autorización del autor o titular del derecho correspondiente;
- d) La adaptación, arreglo o transformación de una obra protegida o de parte de ella, sin autorización del autor o del titular del derecho;
- e) La comunicación al público por cualquier medio o procedimiento de una obra protegida o de un fonograma, sin la autorización del titular del derecho correspondiente;
- f) La distribución de reproducciones no autorizadas, totales o parciales, de una obra protegida o de un fonograma, ya sea por medio de la venta, el arrendamiento, el alquiler, el arrendamiento con opción a compra, el préstamo o en cualquier otra forma;
- g) La fijación, reproducción o comunicación al público, por cualquier medio o procedimiento de una interpretación o ejecución artística, sin la autorización del artista intérprete o ejecutante o del titular del derecho;

- h) La fijación, reproducción o retransmisión de una emisión, transmitida por satélite, radiodifusión o por hilo, cable, fibra óptica o cualquier otro procedimiento, sin autorización del titular;
- i) La comunicación al público de una emisión o transmisión efectuada en un lugar al que el público pueda acceder mediante el pago de un derecho de admisión, o bien, para efectos de consumir o adquirir productos o servicios, sin la autorización del titular del derecho correspondiente;
- j) La publicación de una obra protegida con el título cambiado o suprimido, con o sin alteración de la misma;
- k) La fabricación, ensamble, modificación, importación, exportación, venta, arrendamiento o distribución por cualquier medio, de un dispositivo o sistema tangible o intangible, sabiendo o teniendo razones para saber que el dispositivo o sistema sirve primordialmente para decodificar una señal de satélite codificada portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de la señal de satélite codificada; así como la recepción y subsiguiente distribución dolosa de una señal portadora de programas que se haya originado como una señal de satélite codificada, a sabiendas que ha sido decodificada sin la autorización del distribuidor legítimo de la señal."
- l) La realización de cualquier acto que eluda o pretenda eludir una medida tecnológica efectiva implementada por el autor o el titular del respectivo derecho o bien por un artista interprete o ejecutante o un productor de fonogramas, para evitar o controlar el acceso o la utilización no autorizada de todo tipo de obra, de una interpretación o ejecución artística o de un fonograma protegidos, así como la fabricación, importación, distribución, venta, oferta para la venta o cualquier forma de comercialización de dispositivos, productos o componentes que permitan eludir o facilitar eludir esas medidas tecnológicas efectivas;
- m) La realización de cualquier acto que induzca, permita, facilite u oculte una infracción a cualesquiera de los derechos exclusivos correspondientes a los autores, a los titulares de un derecho de autor, a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas o a los organismos de radiodifusión;

- n) La supresión o alteración no autorizada de cualquier información electrónica sobre la gestión de derechos de los derechos de autor o derechos conexos.
- o) La distribución, comercialización, promoción, importación, emisión o comunicación al público sin autorización de obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, producciones fonográficas o emisiones, sabiendo que la información electrónica sobre la gestión colectiva de cualesquiera de esos derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización;
- p) El transporte, almacenamiento u ocultamiento de reproducciones o ejemplares, en cualquier tipo de soporte material, de obras protegidas, de fonogramas, de interpretaciones o ejecuciones artísticas o de emisiones, fabricadas sin el consentimiento del autor o el titular del derecho correspondiente;
- q) La recaudación de beneficios económicos por la utilización de obras, de interpretaciones artísticas o ejecuciones, de fonogramas o de emisiones de organismos de radiodifusión protegidos, o la realización de cualesquiera otras actividades propias de una sociedad de gestión colectiva, sin estar facultado para tales efectos;
- r) La divulgación de una obra inédita sin el consentimiento del autor o del titular del respectivo derecho;
- s) La traducción, total o parcial, de una obra sin la autorización del autor o titular del derecho correspondiente;
- t) La distribución no autorizada del original o reproducciones legítimas de una obra protegida o de un fonograma, ya sea por medio de la venta, el arrendamiento, el alquiler, el arrendamiento con opción a compra, el préstamo o en cualquier otra forma; y
- u) La importación o exportación del original o de reproducciones de toda obra protegida, con fines de explotación comercial, en cualquier tipo de soporte o de fonogramas, sin la autorización del titular del derecho respectivo.

La determinación de los supuestos contenidos en esta norma se hará con base en las disposiciones aplicables de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos."

Artículo 88. Con el propósito de asegurar al 31 de marzo de 2007 la utilización de programas de ordenador con la autorización del autor o titular del derecho de autor, los Organismos del Estado, así como las entidades descentralizadas y autónomas, deberán, en un plazo no mayor de los seis (6) meses siguientes a la vigencia del presente Decreto:

- a) programar en sus proyectos de presupuesto de ingresos y egresos, las partidas que sean necesarias para regularizar el uso lícito de programas de ordenador, según sea el caso; y
- b) aprobar, implementar y aplicar sus correspondientes disposiciones normativas que además de establecer los procedimientos o mecanismos de adquisición lícita de tales programas de ordenador regulen las condiciones y políticas de su administración de conformidad con lo establecido en la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, incluyendo la obligación de contar con un registro e inventario actualizado de los ordenadores, de los programas utilizados y de las correspondientes licencias, así como de toda medida tendiente a evitar la utilización no autorizada de esos programas.

CAPITULO VII

Ambiental

Artículo 89. Se reforma el artículo 33 del Decreto 68-86, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 33.- Para la aplicación de lo regulado en este capítulo, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, tendrá en cuenta discrecional:

- a) La mayor o menor gravedad del impacto ambiental;
- b) La trascendencia del mismo en perjuicio de la población;
- c) Las condiciones en que se produce;
- d) La reincidencia.

La determinación de los aspectos establecidos en los incisos a), b) y c) se hará de acuerdo a las disposiciones reglamentarias respectivas.

El monto de las multa a imponer se fijará entre mil (1,000) y cien mil (100,000) quetzales.

En cualquier caso, las controversias derivadas de la aplicación de este artículo podrán resolverse mediante el procedimiento arbitral, de conformidad con lo regulado en la Ley de Arbitraje, decreto 67-95 del Congreso de la República."

Artículo 90. Se reforma el artículo 36 del Decreto 68-86, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 36. Toda multa o sanción que se imponga, deberá hacerse efectiva en los plazos que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales establezca para cada caso en particular. En caso de incumplimiento, se procederá de conformidad con la ley correspondiente, siempre que no existan recursos pendientes.

Las multas provenientes de la aplicación de esta ley, constituyen fondos privativos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, con destino exclusivo para reparar el daño ambiental causado."

Artículo 91. Se reforma el artículo 347 a) del decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 347 a. Contaminación. Será sancionado con prisión de uno a dos años, y multa de seiscientos a diez mil quetzales, al que incumpliendo las disposiciones reglamentarias sanitarias o ambientales, contaminare el aire, el suelo o las aguas, introduciendo, desechando, liberando o vertiendo sustancias o productos que puedan perjudicar a las personas, a los animales, bosques o plantaciones.

Si la contaminación se produce en forma culposa, se impondrá multa de cuatrocientos a tres mil quetzales."

Artículo 92. Se reforma el artículo 347 b) del decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 347 b. Contaminación Industrial. Se impondrá prisión de dos a diez años y multa de seis mil a veinte mil quetzales,

al Director, Administrador, Gerente, Titular o Beneficiario de una explotación industrial o actividad comercial que incumpliendo los parámetros y plazos que contienen las disposiciones reglamentarias sanitarias o ambientales, permitiere o autorizare, en el ejercicio de la actividad comercial o industrial, la contaminación del aire, el suelo o las aguas, introduciendo, desechando, liberando o vertiendo sustancias o productos que puedan perjudicar a las personas, a los animales, bosques o plantaciones.

Si la contaminación fuere realizada en una población, o en sus inmediaciones, o afectare plantaciones o aguas destinadas al servicio público, se aumentará el doble del mínimo y un tercio del máximo de la pena de prisión.

Si la contaminación se produjere por culpa, se impondrá prisión de uno a cinco años y multa de dos mil a diez mil quetzales.

En los dos artículos anteriores la pena aumentará en un tercio si a consecuencia de la contaminación resultare una alteración permanente de las condiciones ambientales o climáticas."

Artículo 93. Se reforma el artículo 347 c) del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 347 c. Responsabilidad del Funcionario. Las mismas penas indicadas en el artículo anterior se aplicarán al funcionario público que incumpliendo las disposiciones reglamentarias aprobare la instalación de una explotación industrial o comercial contaminante, o consintiere su funcionamiento. Si lo hiciere por culpa, se impondrá prisión de seis meses a un año y multa de dos mil a diez mil quetzales."

Artículo 94. Se adiciona un nuevo artículo 347 d) al Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal y sus Reformas, el cual queda así:

"Artículo 347 d. Contaminación por Funcionario. Al funcionario o empleado público que incumpla las disposiciones reglamentarias y obligaciones de su cargo relativas a protección de recursos renovables y no renovables, manejo, recolección, tratamiento o disposición de desechos líquidos o sólidos, se le impondrá la pena de dos a diez años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargo o empleo público."

CAPITULO VIII

Solución de Controversias

Artículo 95. Se adiciona un párrafo tercero al Artículo 2) de la Ley de Arbitraje, Decreto 67-95 del Congreso de la República, el cual queda así:

"Las controversias que surjan derivadas de la aplicación, interpretación y ejecución de las contrataciones internacionales, se resolverán de acuerdo a las normas contenidas en el Reglamento de Arbitraje de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, salvo que las partes acuerden expresamente el sometimiento a otros foros de arbitraje."

CAPITULO IX

Disposiciones Transitorias y Finales

Artículo 96. Los artículos 68 y 88 de la presente ley, entrarán en vigencia un (1) año después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre comercio entre la República Dominicana- Centroamérica y los Estados Unidos de América.

Artículo 97. El artículo 87 literal k) de la presente ley, entrará en vigencia dieciocho (18) meses después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana- Centroamérica y los Estados Unidos de América.

Artículo 98. Los artículos 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 61, 76, 77, 82 y 86 de la presente ley, entrarán en vigencia dos (2) años después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana- Centroamérica y los Estados Unidos de América.

Artículo 99. Los artículos 70, 82, 83, 86 y 87 literal l), de la presente ley, entrarán en vigencia tres (3) años después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana-Centroamérica y los Estados Unidos de América.

Artículo 100. Los artículos 73, 80 y 91 de la presente ley, entrarán en vigencia cuatro (4) años después de la entrada en

-000130-

vigencia del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana-Centroamérica y los Estados Unidos de América.

Artículo 101. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente después de su publicación en el Diario de Centro América.

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y PUBLICACION.

EMITIDO EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL
_____ DE DICIEMBRE DE 2005.

